UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
Tesis Licenciatura en Trabajo Social

**La vulnerabilidad de los derechos de los adolescentes
en conflicto con la Ley.**

Un abordaje a partir de las denuncias y los debates actuales acerca de la violación de los derechos humanos de los adolescentes infractores privados de libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (2013 – 2014)

María Lilian Rodríguez Sigales
Tutora: Sandra Leopold

2015

INDICE

INTRODUCCIÓN..... pág 3

CAPÍTULO I:

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL URUGUAY DE

HOY..... pág 7

1.1 *Infantilización y criminalización de la pobreza*.....pág 7

1.2 *Adolescentes en conflicto con la ley penal*.....pág 9

CAPÍTULO II:

LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS Y

LOS ADOLESCENTES..... Pág 14

2.1 *El marco normativo*..... pág 14

2.1.1 *La legislación internacional*..... Pág 14

2.1.1.1 *El marco general*..... pág 14

2.1.1.2 *El marco específico*..... Pág 14

2.1.1.2.1 *Convención sobre los Derechos del*

Niño..... pág 17

2.1.2 *La legislación en Uruguay*..... pág 18

2.1.2.1 *Código de la Niñez y Adolescencia de*

Uruguay..... pág 18

2.1.2.2 *Sistema de Responsabilidad Penal*

Adolescente.....pág 22

CAPÍTULO III

LAS DENUNCIAS SOBRE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS

HUMANOS DE LOS ADOLESCENTES

PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL SIRPA pág 24

3.1 *El disparador mediático*..... pág 24

3.2 *El aporte de la prensa*..... pág 25

3.3 *El aporte de la Institución Nacional de Derechos*

Humanos..... pág 28

3.3.1 *La protección de los Derechos Humanos de los Adolescentes en conflicto con la ley penal privados de libertad*..... pág 28

CAPÍTULO IV:

CLAVES TEÓRICAS PARA EL ANÁLISIS..... pág 38

4.1 <i>El sistema penal juvenil uruguayo</i>	pág. 38
4.1.1 Sistema Penal Juvenil y Derechos Humanos	pág. 38
4.1.2 Los adolescentes infractores privados de Libertad en el marco del SIRPA.....	pág. 42
4.1.2.1 Lo que “traen”.....	pág. 44
4.1.2.2 Lo que “reciben”.....	pág. 46
4.1.3 La privación de libertad. El encierro.....	pág. 49
4.1.4 El Sistema de Responsabilidad Adolescente. La tensión entre paradigmas..	pág. 54
CONCLUSIONES	<i>pág. 57</i>
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES	<i>pág. 61</i>

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo corresponde a la Monografía final, para la obtención del título de grado de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

El *tema elegido*, ***La vulnerabilidad de los derechos de los adolescentes en conflicto con la Ley. Un abordaje a partir de las denuncias y los debates actuales acerca de la violación de los derechos humanos de los adolescentes infractores privados de libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (2013 – 2014)***, es producto del interés personal por profundizar en el conocimiento de una problemática en el Uruguay de hoy.

Este trabajo final es además el resultado del aprendizaje personal basado tanto en los conocimientos teóricos adquiridos en las asignaturas cursadas en la Licenciatura en Trabajo Social, como en los conocimientos incorporados en los espacios de práctica de dicha Licenciatura.

El *objeto de estudio* lo constituyen *Las denuncias y los debates actuales sobre la ejecución de las medidas privativas de libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente*¹. Cuando hablamos de *debates actuales* nos referimos a los cuestionamientos y reflexiones que se visibilizaron a partir del impacto que causaron las denuncias que los propios adolescentes privados de libertad hicieron en un medio televisivo en 2014. ² Como dichas denuncias daban cuenta de situaciones violatorias a los derechos humanos de dichos adolescentes iniciadas el año anterior, el período analizado en la presente Monografía comprende los años 2013 y 2014.

En cuanto a la *justificación* del tema elegido, consideramos que el tema tiene gran *relevancia social*, ya que el problema de las medidas aplicadas a los adolescentes en conflicto con la ley penal privados de libertad ha puesto en tela de juicio en el Uruguay de hoy la eficacia y la eficiencia de las gestiones sociales e institucionales para preservar los derechos de niños y adolescentes como deber prioritario del Estado y de la sociedad toda.

Las discusiones sobre las violaciones a los derechos de la adolescencia en conflicto con la ley penal privada de libertad ha dado lugar no solamente a la búsqueda de responsabilidades directas a partir de la denuncia sobre torturas y malos tratos a los adolescentes internados en dependencias del SIRPA, sino a las responsabilidades en la construcción de las vulnerabilidades de los adolescentes en conflicto con la ley, previas y posteriores al período de la privación de libertad.

¹ En adelante SIRPA.

² SAETA T.V. (Canal 10), Noticiero Central, *Subrayado*, Sección *Subrayado investiga*, abril de 2014.

Entendemos que el tema tiene además *relevancia política*, demostrada no solamente en las características punitivas de algunas propuestas presentadas por sectores políticos y sociales –como la de reforma constitucional puesta a consideración de la ciudadanía en la Elección Nacional del veintiséis de octubre próximo pasado-, como la resistencia a esa propuesta defendida por distintos sectores políticos y sociales. Un hecho a destacar fue que los resultados mostraran que ciudadanos que votaron por sectores de partidos políticos que apoyaban la reforma no incluyeran la papeleta del Sí, así como a la inversa ciudadanos que votaron por sectores y partidos políticos que se oponían a la reforma, incluyeran la papeleta. La percepción general fue que estábamos ante un fenómeno político nuevo, que desafiaba ideologías y tradiciones, tanto de derecha como de izquierda.

Finalmente consideramos que el tema tiene también *relevancia académica*, no solamente en cuanto a los desafíos teóricos para varias disciplinas – como la Sociología, el Trabajo Social, la Psicología, la Antropología, etc.-, sino principalmente para las prácticas de los profesionales de dichas disciplinas. En particular para quienes pretendemos - teniendo como norte la ética profesional--, promover cambios desde el Trabajo Social.

En cuanto a los *objetivos* del tema elegido, como *objetivo general*, nos propusimos analizar la vulnerabilidad de los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley penal, a partir del desfasaje que existe en el Uruguay entre la normativa vigente referida a la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia por un lado, y por otro la realidad, especialmente en relación a la aplicación de las medidas socioeducativas en el ámbito del SIRPA. .

Y en cuanto al *objetivo específico*, nos propusimos tratar de ordenar un debate público sobre la ejecución de las medidas socioeducativas que ejecuta el SIRPA. Para ello entendimos importante analizar las denuncias que durante los años 2013 y 2014 dieron lugar al cruce de discursos entre los distintos actores del Sistema Penal Adolescente en el marco del señalamiento de responsabilidades sobre la violación de los derechos humanos de los adolescentes infractores privados de libertad.

En cuanto a la *metodología*, desde la perspectiva cualitativa, se trabajó con fuentes secundarias –materiales bibliográficos y prensa oral y escrita-, así como con documentos institucionales.

En referencia a la prensa oral y escrita, se eligieron el Semanario *Brecha* y el Programa *En Perspectiva* de Radio *El Espectador*, considerando el tiraje y la difusión nacional de ambos medios y el enfoque de periodismo de investigación que dieron al tema objeto de la presente Monografía..

En cuanto a las fuentes documentales, entendimos fundamental el trabajo con documentos institucionales como los Informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su legitimidad y nivel jerárquico tanto en nuestro país como ante los organismos específicos de la Organización de las Naciones Unidas.

De acuerdo a lo anteriormente dicho, el *cuerpo de la monografía* se estructura en cuatro capítulos y las Conclusiones.

En el Capítulo I se trabajó el tema de *Niñez y adolescencia en el Uruguay de hoy*, a partir de dos conceptos que consideramos claves como lo son la *infantilización de la pobreza*, y la *criminalización de la pobreza*. Estos dos conceptos nos permitieron contextualizar la problemática de los *Adolescentes en conflicto con la Ley*.

En el Capítulo II profundizamos el tema de Los Derechos Humanos de los niños y los adolescentes. Para hacerlo analizamos primeramente el marco normativo, para lo cual abordamos primeramente la legislación internacional en lo que refiere al marco general y al marco específico, deteniéndonos especialmente en la Convención de los Derechos del Niño. Luego analizamos la legislación nacional, deteniéndonos en el Código de la Niñez y Adolescencia, así como el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

En el Capítulo III abordamos el tema de Las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos de los adolescentes en conflicto privados de libertad en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, así como los debates a que dieron lugar dichas denuncias. Realizamos aquí el análisis de las fuentes de prensa y las fuentes documentales. En este capítulo se presentan las denuncias en referencia a los dos ámbitos mencionados: los medios de comunicación y la Institución Nacional de Derechos Humanos.

En el Capítulo IV se analizan *Las claves teóricas para el análisis* del tema de la monografía y en especial del objeto de estudio de la misma. En este sentido, la estructura de este capítulo contiene la reflexión teórica sobre *La vulnerabilidad de los derechos humanos de los adolescentes infractores privados de libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente*. Con esta finalidad se aborda el tema del *sistema penal juvenil uruguayo*, para lo cual se realiza el análisis del *Sistema Penal Juvenil y los Derechos Humanos*, y el de la situación de *Los adolescentes infractores privados de libertad en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente*, deteniéndonos en *Lo que “traen”* esos adolescentes cuando entran al régimen de privación de libertad y *Lo que “reciben”* cuando entran a los Centros y Hogares del SIRPA para el cumplimiento de la pena establecida. Seguidamente se analiza el tema de *La privación de libertad. El encierro*, continuando con el de *El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente* en relación a *La tensión entre paradigmas*,

cerrando con *El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y los Derechos Humanos*.

Luego se realizan las consideraciones finales en el espacio de las Conclusiones.

Finalmente se presenta la Bibliografía y las Fuentes Documentales consultadas.

CAPÍTULO I

Niñez y adolescencia en el Uruguay de hoy

1.1 *Infantilización y criminalización de la pobreza*

A partir de la recuperación democrática en 1984 – y durante veinte años-, la pauperización de ciertos sectores de la sociedad uruguaya se agravó en el marco de políticas neoliberales aplicadas desde el gobierno. La marginalidad y la exclusión social que vivió nuestro país entre 1984 y 2004 dio lugar a *“un proceso denominado “infantilización de la pobreza” por el cual ésta tiende a concentrarse en los sectores de población más joven y particularmente entre los niños, siendo producto de una mala distribución del capital social y de las mayores tasas de natalidad de los sectores de menor ingreso”*.³

Esta situación comenzó a cambiar a partir de la llegada al gobierno en 2004 del *Frente Amplio*, un partido político de izquierda, fundamentalmente recuperando –entre otros temas-, la responsabilidad del Estado en la solución de los problemas sociales. Ello dio lugar a un cambio en la gestión de las políticas públicas y en los énfasis de las políticas sociales a efectos de comenzar a eliminar la pobreza y la indigencia.

Con la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y con la aplicación de Planes y Programas - de corto y medianos plazo-, desde esta cartera ministerial se empezó a apoyar a los sectores excluidos de la sociedad.

Pero a pesar de haber avanzado en políticas sociales⁴ y en la legislación⁵ –lo que redundó en un cambio normativo-, dichos avances han sido y son lentos ya que *“más allá o más acá de los derechos consagrados legalmente, muchos adolescentes viven en condiciones miserables y en espacios diferenciados: cantegriles, asentamientos, viviendas de emergencia en todo el cordón suburbano de la ciudad, en situación de grosera restricción de sus necesidades básicas y como tales excluidos de la comunidad”*.⁶

Los datos de la realidad actual son muy claros al respecto. Como se destaca en el Informe de UNICEF 2014, de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Instituto

³ Berro, Graciela, Cohen, Jorge, Silva Balerio, Diego (2008), *Engarrados. Relatos y experiencias de adolescentes en el sistema penal juvenil*. Montevideo, Ed. Tradinco, pág. 2.

⁴ PANES, PLAN DE EQUIDAD

⁵ Código de la Niñez y Adolescencia aprobado en 2004.

⁶ Berro, G., Cohen, J., Silva Balerio, D., ob. cit. pág. 4.

Nacional de Estadísticas en 2013, el 22,6 % de los niños uruguayos entre 0 y 5 años son pobres.⁷

Dicho Informe señala además que en los primeros dieciocho años de vida *“se juega el desarrollo de las capacidades de las personas, las cognitivas en la primera infancia y, después, en la adolescencia, las habilidades socio-emocionales para vivir en comunidad”*.⁸

En su condición de sujetos dependientes o de autonomización en proceso, los niños y adolescentes necesitan la protección de parte de los adultos y del Estado para el ejercicio pleno de sus derechos.

La marginalidad y la exclusión son dos de las caras del desamparo social del que son víctimas inocentes los niños y adolescentes que viven en situación de pobreza o indigencia. Niños y adolescentes que muchas veces tienen como única alternativa vivir en situación de calle. Parafraseando a Alfredo Moffatt, Marina Cal señala que los niños *en situación de calle* presentan esa específica característica: *“viven en la calle”,* es decir *“no tienen casa, o sea no tienen un adentro, quedaron “encerrados afuera”*.⁹

Estos niños - especialmente visibles en el Uruguay a partir de la década del '90-, son producto de la pobreza de sus familias (desempleo o trabajo precario de los adultos), del traslado de grupos de personas y realojos en zonas que se convirtieron barrios estigmatizados, La desintegración familiar (padres ausentes, hogares monoparentales, padres muchas veces cumpliendo penas en cárceles, etc.) aumentó la vulnerabilidad de estos jóvenes, que como señala la Dra. Berro *“muchos de estos adolescentes tienen un solo contacto con las instituciones del Estado. Ese contacto no es a través de los dispositivos educativos, de salud o culturales, sino únicamente con los de control social: Policía, Juzgados, INAU, ONG’s.”*¹⁰

La fractura social profundizó a su vez la injusticia social, que ha llevado a la discriminación de determinados sectores, asociándolos con hechos delictivos. demostrando nuevamente que los más pobres también resultan históricamente los más estigmatizados. Este fenómeno se pone en evidencia sobre todo cuando se incrementa en determinados sectores sociales la sensación de inseguridad.

Durante los últimos años el tema de la inseguridad se ha convertido en un tópico recurrente tanto para los medios de información y comunicación como para gran parte

⁷ UNICEF, Informe 2014, pág. 8.

⁸ Idem. pág. 21

⁹ Cal, Marina, Idem. *Aproximación a la noción de niños, niñas y adolescentes en situación de calle*, (Ponencia, Rivera, julio de 2011), pág. 6.

¹⁰ Berro, Graciela, Cohen, Silva Balerio, Diego, op. cit., pag. 9.

de la ciudadanía, y para los sectores políticos de la oposición al gobierno, cuyos principales representantes -organizando una verdadera “pulseada”-, instalaron la discusión en varios niveles, no solamente en el parlamentario.

La discusión entre lo considerado “real” y lo considerado “virtual” habilitó el análisis sobre los delitos y los delincuentes, fortaleciendo las afirmaciones –apoyadas o no en estudios científicos-, sobre el aumento de la delincuencia, y especialmente de la delincuencia juvenil, lo que le daba una nueva dimensión al problema de la inseguridad.

Esa nueva mirada inquisidora que asocia adolescencia y pobreza al delito, demanda penas más duras, y responsabilidades más tempranas, abonando el terreno a la campaña de recolección de firmas que habilitó el referéndum para bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes de 18 a 16 años.

1.2 Adolescentes en conflicto con la ley penal

Abordado desde varias disciplinas, el concepto *adolescencia* ha dado lugar a muchas definiciones. Pero más allá de los énfasis de cada una de esas definiciones, lo que es general es la distinción entre lo adolescente y lo adulto. Partiendo de esta base *“...será útil ante la necesidad de entender a la adolescencia como un concepto que incluye múltiples heterogeneidades, fruto de ser una construcción socio histórica, cultural y relacional”*.¹¹

Desde este punto de vista, la adolescencia, además de ser ubicada cronológicamente como etapa en la vida de las personas, en el marco de un proceso de maduración, *“es un trabajo de transformación o proceso de expansión y crecimiento, de germinación y creatividad, que –como cualquier proceso viviente-, tiene logros y fracasos que nunca se distribuyen en blanco y negro”*.¹²

Viñar es tal vez quien presenta en nuestro medio con más precisión y audacia una visión de la adolescencia en el mundo actual. Ya inclusive desde el título del libro suyo al que hacemos referencia –*Mundos adolescentes y vértigo civilizatorio*-, el autor nos ubica en una perspectiva novedosa, ya que además de recordarnos que el concepto “*adolescencia*” es producto de una construcción cultural que varía en el tiempo, señala que *“siempre hay una pluralidad de adolescencias en cada tiempo histórico y según el lugar geográfico y social, y por otra parte, son de considerar las diferencias de estilos*

¹¹ Movimiento Nacional Gustavo Volpe/UNICEF (2008), *Privados de libertad. La voz de los adolescentes*, Montevideo, UNICEF Uruguay, pág. 26.

¹² Viñar, Marcelo (2009), *Mundos adolescentes y vértigo civilizatorio*, Montevideo, Ed. Trilce, pág. 15.

personales que muestra la diversidad humana".¹³ Por eso insiste en que las generalizaciones están equivocadas, porque la adolescencia *"debe ser estudiada en la diversidad de sus contrastes, siempre desde lo singular e inédito, y hay ciertas formas de generalización, de "regularidades observables" que caminan en el sentido opuesto al deseado, el de desconocer lo singular"*.¹⁴

Para Viñar el común denominador de las "adolescencias" del mundo actual es el enfrentamiento al "vértigo civilizatorio". Afirma que este vértigo civilizatorio está caracterizado fundamentalmente por urgencias artificiales que desestabilizan nuestro tiempo interior que *"nos habita"* y *"nos configura"*, y donde pasado, presente y futuro están desfigurados. El autor señala que el *"sobrecalentamiento"* del presente es funcional al trastorno de la construcción de subjetividades, al que se agrega el cambio vertiginoso de los referentes familiares, sociales y culturales que impiden a los adolescentes los modelos claros a los cuales adherir u oponerse. La inmediatez y el vacío son una constante.

Pero antes de ser adolescente, el menor fue niño, y ambas situaciones conforman un trayecto que –estudiado por distintas disciplinas- ha sido denominado *"las dos ventanas de oportunidades"*.¹⁵ Tanto desde el campo de las ciencias sociales como de la neurociencia, se ha acordado en ubicar la "primer ventana" en la primera infancia y la "segunda ventana" en la adolescencia, y aunque ambas etapas no son iguales, sí constituyen una unidad ya que son los cimientos de nuestra vida futura.

Una vida de adulto sana en lo físico pero fundamentalmente en lo psíquico y emocional está relacionada con las condiciones del entorno familiar y social que han tenido los niños y adolescentes para desarrollarse como personas.

En este sentido, la desprotección y el desamparo social dan lugar a la fractura social como forma de violencia que genera nuevas modalidades de violencia.

Calificando al período 1992 – 2012 como dos décadas de *"falacias y fracasos"* Morás afirma que *"los antiguos problemas que afectaban a la infancia y adolescencia, como pobreza, mendicidad y abandono, son traducidos en épocas de bonanza como multiplicación de incivildades y comportamientos enajenados que exigen una recuperación del orden perdido recurriendo a un más firme ejercicio de la autoridad"*.¹⁶

La violencia pasó a ser uno de los indicadores de las fisuras sociales que vivió nuestro país a partir de la aplicación de las políticas económicas neoliberales de la década del '90. Una violencia con varios rostros, y desde distintos emisores. Contra cosas y contra personas; individual, colectiva, institucional. Una violencia que generó nuevos

¹³ Idem. pág. 21.

¹⁴ Idem. pág. 21

¹⁵ UNICEF, ob. cit. pág. 7.

¹⁶ Morás, Luis Eduardo (2012), *Los hijos del Estado*, Montevideo, SERPAJ, pág. 10.

paradigmas delictivos que provocaron alertas. Alertas que de alguna manera son potenciadas por el miedo, muchas veces fomentado desde los medios de comunicación.

Un ejemplo de ello en nuestro país es el haber abonado en el imaginario colectivo esta cuestión a través de prédicas que intentan convencer del auge de las conductas delictivas juveniles, así como de la violencia de esas conductas delictivas, sin apoyar esas afirmaciones en datos empíricos reales.

El tema de la inseguridad no solamente se ha transformado entonces en el tema “vedette” de muchos programas televisivos y de los noticieros, sino que se ha convertido en el tema recurrente de los líderes políticos de la oposición al gobierno.

Como afirma la Dra. Patricia Rodríguez, viejos discursos vuelven a poner la mira en *“los chivos expiatorios de siempre: los delincuentes (vistos ahora como enemigos, a quienes se justifica violentar groseramente sus derechos fundamentales, en tanto seres diferentes, marginales, excluidos de la sociedad e irrecuperables); los “menores” (señalados como los responsables de la comisión de la mayor cantidad de delitos violentos) y la droga (en especial, la pasta base, como amplificador y agravante de la conducta de los dos anteriores)”*.¹⁷

De esta manera se intenta desviar la atención hacia aquellos sectores marginales de la sociedad, con un alto índice de vulnerabilidad, *“criminalizando a la pobreza y justificando la tutela de la seguridad como derecho fundamental para unos, limitando exacerbadamente la libertad de otros; situación que profundiza diferencias en la sociedad, que ahonda una separación entre “nosotros” y “ellos”, entre el “bien” y el “mal”*.¹⁸

El reclamo de ciertos sectores de la sociedad para con los adolescentes que cometieron delitos es que “los encierren”, y encerrados, “que no se fuguen”, no importando la existencia y las características de las medidas socioeducativas que existen en esos centros especiales de detención, que son o debieran ser lo fundamental durante el tiempo de privación de libertad.

Como acertadamente señala Luis Eduardo Morás *“redactar una crónica sobre los adolescentes en conflicto con la ley sustentada en las percepciones y discursos elaborados en el último siglo, hace inevitable la referencia a una situación de alarma pública como producto de la inaudita gravedad de actos infraccionales que anuncian una creciente perversidad de los infractores”*.¹⁹

¹⁷ Rodríguez, Patricia, *“Tiempos violentos. Apuntes sobre la (in)seguridad”*, Revista Espacio Abierto, Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Centro de Investigación y Estudios Judiciales, No. 16, mayo de 2012, pág. 67.

¹⁸ Idem. pág. 68.

¹⁹ Morás, Luis Eduardo, ob. cit. pág. 12.

El adolescente que producto de la marginalidad y la exclusión se transforma en vulnerable para los reclamos autoritarios, se convierte en el objetivo ideal de quienes ven en él el principal argumento para el embate punitivo que evita el abordaje de las causas estructurales de esa vulnerabilidad.

Como señala Jorge Cohen “...los adolescentes empobrecidos que habitan las zonas periféricas de la ciudad (y no sólo las periféricas) son sometidos al control social “fuerte”, policía, juzgados, reclusión y un desfile de profesionales que interrogan y diagnostican. De esta manera se facilita la construcción de los adolescentes “distintos” y “peligrosos”.²⁰

La palabra que inicia el título del libro anteriormente referido ya es significativa: *engarronados*.²¹ Según sus autores esa palabra fue elegida por ellos porque no solamente aparece mencionada en las declaraciones de varios adolescentes en conflicto con la ley penal ante los jueces, sino porque da cuenta de la percepción de dichos adolescentes desde el momento en que son capturados por la policía.

Comienza entonces para el adolescente un camino que lo marca para el resto de su vida. En este sentido, recuerda Cohen que “...los jóvenes judicializados fundamentalmente a edades muy tempranas, tienden a ingresar en una peregrinación kafkiana de cadenas circulares sin retorno de detenciones, anotaciones policiales, ingresos a INAU y “fugas” reiteradas”.²²

La construcción de estereotipos sociales en cuanto a los adolescentes pobres como amenaza a la seguridad es permanente, siendo esta actitud discriminante otra forma de violación de los derechos humanos de estos jóvenes.

La percepción no condice con la realidad. De ello dan cuenta los documentos oficiales. Por ejemplo, los datos del *Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad* de la División de Estadísticas y Análisis Estratégico del Ministerio del Interior señalan que el incremento de la participación de menores: para el primer semestre de 2013 (datos para todo el país) no es relevante, y descendió con respecto a igual período de 2012.

En cuanto a *Homicidios Consumados con Participación de Menores (detectada por año)*, los porcentajes – aunque incluye homicidios sin aclarar todavía-, se da cuenta de que en el primer semestre de 2012 la participación de adultos fue de 86%, y la de

²⁰ Cohen, Jorge, “Adolescencia”, en Berro, Graciela, Cohen Jorge, Silva Balerio, Diego (2008), *Engarronados. Relatos y experiencias de adolescentes en el sistema penal juvenil*. Montevideo, Ed. Tradinco, pág. 30.

²¹ **Garrón.** Circunstancia incómoda o inevitable. **Comerse un garrón.** Pasar por una circunstancia adversa. Ser engañado. Padeecer las consecuencias de algo en lo que no se participó. Ref. ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS, *Diccionario del español del Uruguay* (2011), Montevideo, Ed. de la Banda Oriental, pág. 283.

²² Cohen Jorge, idem. pág. 31.

menores fue de 14%, mientras que en igual período de 2013 la participación de adultos fue de 81% y la de menores de 9%.²³

En el mismo documento, en cuanto a la *Participación de Menores en Homicidios Consumados (sólo aclarados)* se informa que en el primer semestre de 2012 la participación de adultos fue de 76% y la de menores fue de 24%, mientras que en igual período de 2013 la participación de adultos fue de 83% y la de menores de 17%.²⁴

Tanto la opinión pública –recogida por los medios de comunicación-, como el sistema político manejan las cifras del Ministerio del Interior, o sea de las intervenciones policiales. No tienen en cuenta las cifras provenientes del poder judicial, ni la de los organismos internacionales o la de científicos expertos en el tema. Esto hace que tanto en la percepción como en el discurso los actores mediáticos y políticos manejen información incompleta que genera datos falsos.

Contradicciones, errores o manipulaciones de datos hechas desde la ignorancia o desde la mala intención no han dado cuenta de la compleja realidad que se pretende transformar.²⁵

De este modo, la percepción social no se ajusta a la realidad, aumentando la exclusión de estos jóvenes, y profundizando la estigmatización.

Como afirma Luis Eduardo Morás, esos adolescentes son los que habitan “*una casa sin número de una calle sin nombre de alguno de los barrios citados en las noticias policiales*”.²⁶

²³ Ministerio del Interior (Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad), pág. 6.

²⁴ Idem pág. 7.

²⁵ Morás, Luis Eduardo, ob. cit. pág. 14.

²⁶ Morás, Luis Eduardo, “*Nacer siendo menor. Reflexiones sobre punitividad, crisis institucional y adolescentes en conflicto con la ley*”, en Serna, Miguel (Coord.) (2010), *Pobreza y (des) igualdad en Uruguay: una relación en debate*, Montevideo, Udelar, Facultad de Ciencias Sociales (Dpto. de Sociología), CLACSO, pág. 230.

CAPÍTULO II

Los Derechos Humanos de los niños y los adolescentes

2. 1 El marco normativo

2.1.1. La legislación internacional

2.1.1.1 El marco general

En 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas – en adelante ONU-, siendo su objetivo más importantes el desarrollo del Derecho Internacional para la defensa de los Estados y las personas. En el Preámbulo de la Carta fundacional de la ONU se establece el objetivo de “crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional”.²⁷

Desde el punto de vista específico, el 10 de diciembre de 1948 la ONU aprueba la Declaración de los Derechos Humanos, lo que dio inicio a un proceso muy importante donde instituciones internacionales y nacionales, así como organizaciones no gubernamentales –en adelante ONGs- comenzaron un camino de lucha en defensa de esos derechos.

2.1.1.2 El marco específico

En 1969 la Asamblea General de las ONU define y aprueba los principios de bienestar y protección de la infancia. Este documento será ampliado en 1989 por la Convención de los Derechos del Niño –en adelante CDN-, llevando el tema de la protección de los derechos de la minoridad no solamente al proceso de creación de conciencia, sino a estimular políticas de Estado en este sentido.

.Aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989²⁸, la CDN tiene como objetivo señalar el deber de los Estados de la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Por este motivo entendemos necesario hacer un análisis específico de la CDN más adelante.

²⁷ www.un.org/es/documents/charter/preamble.shtml.

²⁸ Res. No. 44/25 de la Asamblea General de la ONU.

No ha sido tarea fácil armonizar la variedad de las legislaciones –nacionales y locales- de los Estados en cuanto a la protección de los derechos de los niños y adolescentes, tanto a nivel de los derechos desde el punto de vista general como desde el punto de vista de los adolescentes en conflicto con la ley.

Buscando un “mínimo común”, la ONU promovió la existencia de una justicia juvenil –o justicia de menores-, creando un sistema de instrumentos legales para que a los adolescentes en conflicto con la ley se les garantizase la protección de su evolución física y psicológica, y al momento de valorar su falta, la diferenciación entre la gravedad de su conducta y las condiciones o circunstancias individuales del joven que delinquiró.

Previo y casi simultáneamente a la C.D.N., las Naciones Unidas han aprobado una serie de normas para la protección de la minoridad infractora, como las *Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)* ²⁹, las *Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)* y las *Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana)*, conocidas también por sus siglas RMPL. ³⁰

Las *Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores*, conocidas como *Reglas de Beijing* –aprobadas en 1985-, es una normativa que exhorta a los Estados a emprender políticas sociales para prevenir la delincuencia juvenil, a la vez que demanda políticas estatales que incluyan familia, voluntarios y grupos comunitarios, escuelas, etc., así como el deber de cumplir con un tratamiento efectivo, humano y equitativo para con los menores infractores. Se señala que el concepto de protección de los jóvenes en conflicto con la ley no solamente no es contradictorio con el de mantenimiento del orden pacífico de la sociedad, sino que ambos constituyen una unidad que debe ser el fundamento de una política de Estado en el tema. Se establece además la necesidad de la existencia de una justicia de menores a cargo de profesionales especializados.

Las *Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)* -aprobadas el mismo año que las *Reglas de La Habana o RMPL (1990)*-, ellas parten de la clara premisa: “*si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas*”.³¹ O sea, prevenir esta delincuencia es esencial para anticiparse a la comisión de un delito con eficacia,

²⁹ Aprobadas por resolución N° 40/33 de la Asamblea General de la ONU el d8 de noviembre de 1985.

³⁰ Aprobadas por las Resoluciones N° 45/113 y 45/112 de la Asamblea General de la ONU el 14 de diciembre de 1990, respectivamente.

³¹ Idem..

partiendo del respeto a los derechos de niños y adolescentes, considerándolos personas que por ser por ello *sujetos de derecho*, no deben ser tratados como objeto de prejuicios y descalificaciones.

Las Directrices formulan además recomendaciones a la administración de justicia, exhortando a los gobiernos a la aprobación de leyes que protejan los derechos de los menores como por ejemplo contra los malos tratos, la explotación, la forma de penalización de sus faltas, etc.).

Con respecto a las *Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad* –más conocidas como *Reglas de La Habana*, o por sus siglas RMPL-, aprobadas en 1990, la normativa se dirige –como afirma Carlos Pérez Vaquero “ a la protección de los menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles con los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad”.³²

Complementando el pronunciamiento de Riad sobre la prevención, el de La Habana define las normas mínimas para la compatibilización de las condiciones de privación de libertad de los adolescentes con los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, a efectos de evitar los efectos perjudiciales de todas las formas de detención, exhortando además a emprender todas las acciones para reintegrar a la sociedad a los menores infractores.

Las *Reglas de La Habana* enfatizan el tema de las características de de los centros de privación de libertad de los adolescentes, exhortando a los Estados a cuidar el proceso hacia y durante la privación de libertad, recordando que son personas y que son menores, teniendo como meta fundamental la defensa de su dignidad.

En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de la ONU³³, reunido en Viena (Austria), aprueba las *Directrices sobre Administración de la Justicia de Menores*³⁴ por las que obliga a los Estados firmantes de la CDN a cumplir los compromisos específicos asumidos en cuanto a la protección de los derechos de niños y adolescentes con respecto a la aplicación de la Convención en el marco de la administración de justicia de adolescentes, con personal capacitado especialmente para ello. Se enfatiza la coordinación de lo establecido en la CDN con las *reglas y directrices* aprobadas especialmente en la línea de los derechos de los adolescentes, en conflicto con la ley.

³² Pérez Vaquero, Carlos “*La justicia juvenil en el derecho internacional*”, en *Derecho y cambio social*, www.derechocambiosocial.com, abril de 2014.

³³ El ECOSOC es uno de los órganos más importante de la ONU, junto con la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría.

³⁴ Res. No. 1997/30 del ECOSOC.

Finalmente otro antecedente importante es la *Observación General Nº 10 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas*, realizada en febrero de 2007 en Ginebra (Suiza). El documento empieza recordando los “*principios básicos que deben orientar la política general de cualquier justicia de adolescentes*”, como lo son: a) la no discriminación; b) el interés superior del niño; c) el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; d) el respeto a la opinión del niño; y e) la dignidad.

2.1.1.2.1 Convención Sobre los Derechos del Niño

En la propia CDN se establece que la Convención es un tratado internacional que reconoce como niños a los menores de 18 años y considera sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación por sexo, cultura, o etnia, siendo beneficiarios de medidas especiales de protección y asistencia, junto con el acceso a servicios como: educación, salud, y así poder desarrollar sus habilidades y talentos en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, alcanzando sus derechos participando en forma activa.

El Comité de los Derechos del Niño, con sede en Ginebra es un órgano combinado de expertos internacionales que verifica y analiza la aplicación en pos de la protección de los derechos humanos de la infancia.

La propia Convención expresa con claridad que los derechos de niños y niñas son derechos humanos, y que no son especiales sino esenciales. El eje de la CDN es el principio del Interés Superior del Niño.

En lo que se refiere especialmente a la protección de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, la Convención exhorta a los Estados a la creación y/o fortalecimiento de una Justicia de adolescentes, para –entre otros temas-, fiscalicen que dichos Estados velen para “*que ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; no se impondrá la pena capital ni de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de dieciocho años de edad. Ni privado de su libertad ilegal o arbitrariamente: la detención o encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la Ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda*”.³⁵ Se advierte que debe haber un especial cuidado con respecto a su edad, por lo que el menor privado de libertad debe estar separado de los adultos en esa condición.

³⁵ Artículo 37 de la CDN.

El mismo artículo afirma que todo menor privado de libertad tendrá derecho a mantener –salvo en situaciones excepcionales-, contacto con su familia (visitas, correspondencia), así como el deber de las autoridades de brindar prontamente la asistencia jurídica que el menor o su familia necesiten. Se señala además el derecho del adolescente a impugnar la legalidad de la privación de libertad ante autoridades jurídicas o administrativas imparciales, y reclamar que los procesos y resoluciones de su situación se realicen lo antes posible.

Por su parte el Artículo 40 de la CDN señala que durante el período de privación de libertad del menor que ha infringido las leyes penales, las autoridades específicas que se deben encargar de su cuidado, deben trabajar para su rehabilitación así como prepararlo para su reinserción a la sociedad, a partir del respeto de la dignidad del niño y sus intereses superiores, el respeto a los derechos de terceros, y la convicción de que el adolescente tiene una función constructiva en la sociedad de la que forma parte.

En el Artículo 40.2 se habla de las garantías procesales mínimas que los Estados deben garantizar a los adolescentes en conflicto con la ley,

Por último este Artículo, destaca que los Estados deberán de disponer de personas especializadas para actuar con los adolescentes infractores, especialmente en situación de privación de libertad.

Otro concepto clave expresado en el Artículo 40.2 de la CDN es el que tiene que ver con la importancia de los programas de enseñanza y formación profesional tanto para los adolescentes privados de libertad como para los que sin estar privados de libertad cumplen penas alternativas a la reclusión.

2.1.2 La legislación en el Uruguay

2.1.2.1 Código de la Niñez y Adolescencia en el Uruguay.

El Código de la Niñez y Adolescencia, vigente en nuestro país, es la primera adecuación que atiende a los compromisos que el Uruguay asumió al ratificar mediante la Ley 16.137 de 28 de setiembre de 1990, la Convención sobre los Derechos del Niño. Dicho código corresponde al reconocimiento jurídico en el derecho interno uruguayo de los derechos de la infancia que actualmente son reconocidos internacionalmente.

En su capítulo I el CNA expresa los *Principios Generales*, instaurando por primera vez una distinción entre *niño* y *adolescente* ya que el antiguo código de 1934 llamado

Código del Niño –en adelante CN-, legislaba sobre los *menores de edad*, considerando además el límite entre menor y adulto en 18 años. El límite entre la niñez y la adolescencia se define a los 13 años. Uno de los conceptos fundamentales es el que establece que “*en la integración de las normas se utilizará como criterio específico el interés superior del niño y adolescente*” (art. 6), definiéndolo como “...*el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana*” Como señala Juan Faroppa “*Esta concepción hace un aporte sustantivo para la construcción de una cultura de derechos, desde que el interés superior del niño ya no es el concepto subjetivo e impreciso sometido a la discrecionalidad de los adultos, sino un indicador preciso de la forma como se garantiza el goce efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes*”.³⁶

Esta precisión conceptual en cuanto a garantizar el goce de los derechos, cobra una dimensión fundamental cuando se trata de adolescentes en conflicto con la ley privados de libertad.

En el CN de 1934 se legisló para los *menores*, mientras que la normativa del CNA se dirige a los *niños y adolescentes*.

Esa diferencia que no es menor, en lo que refiere al tema de nuestra monografía, encuentra en la comparación entre los dos códigos, otra diferencia, que es la que refiere al concepto de abandono. Mientras que el CN –desde la doctrina de protección irregular-, concibe el abandono como la antesala de la infracción, el CNA separa los conceptos de menor abandonado al de adolescente infractor. El Artículo 70 comienza específicamente el tratamiento del tema de los adolescentes infractores, definiéndolos como quien sea declarado como tal a partir de una sentencia ejecutoria dictada por el juez competente, y que ese adolescente solamente puede ser pasible al procedimiento establecido en el propio Código a quien se le pueda atribuir desde el punto de vista psicológico y material de un hecho que ha infringido la ley penal.

Este Código regula el procedimiento del personal policial, de ahí la importancia de la afirmación de que el personal policial que tome conocimiento con situaciones de los adolescentes en condiciones de vulnerabilidad (contra él o del menor contra terceros) comunique inmediatamente al Juez. Especifica la actuación policial en el caso de los adolescentes infractores³⁷, la forma de procesarlos³⁸ y las medidas socio educativas privativas y no privativas de libertad, y el tiempo de aplicación.

³⁶ Faroppa, Juan, *Comunicación y niñez en situación de calle*, (Curso, Rivera, 2011) www.wozyvos.org.uy, pág. 10.

³⁷ Artículo 74 c). (Principios que rigen).- En todos los casos en que al adolescente se le impute el haber incurrido en actos que se presumen comportan infracción a la ley penal, deberá asegurarse el cumplimiento estricto de las garantías del debido proceso, especialmente las siguientes. C) Principio que

El Código establece exhaustivamente las distintas etapas del proceso hasta llegar a la aplicación de penas, dando cuenta en cada etapa de las garantías para la protección de los derechos del adolescente infractor.

Las medidas pueden ser de dos tipos: las medidas no privativas de libertad y las medidas privativas de libertad.

El Código señala que las medidas que el Juez apruebe pueden ser de tres tipos: a) *socioeducativas* (que pueden ser privativas o no privativas de libertad), b) *curativas*, para quienes presenten algún tipo de incapacidad, destacando que la internación debe cumplirse en instituciones especializadas en el tema, y las c) *privativas de libertad*, que deben darse en caso de infracciones gravísimas, y en casos de reincidencia en el incumplimiento de las medidas dispuestas. En este tercer tipo está previsto la posibilidad de un régimen de semi libertad (visitas a las familias, realización de tareas externas).

En referencia al tema de nuestra monografía, las medidas privativas de libertad, son consagradas en el Artículo 86³⁹-, que presenta como y quien podrá declarar al adolescente responsable de la infracción cometida, precisando la aplicación de la misma.⁴⁰, y sólo puede aplicarse previa sentencia ejecutoria. En el Código se afirma que –de acuerdo con la CDN-, los adolescentes infractores privados de libertad no podrán estar reclusos con personas mayores de 18 años.

Tal vez son dos los principios fundamentales que constituyen el marco ético del tema de la privación de libertad para los adolescentes infractores. En *primer lugar*, como lo expresa el Artículo 37.b deL CNA, el de que la privación de libertad sea el último recurso a la hora de dictar sentencia, y que sea por el menor tiempo posible En *segundo lugar* el de que el lugar de reclusión no sea un espacio de castigo sino de

condiciona la detención.- Sólo puede ser detenido en casos de infracciones flagrantes o existiendo elementos de convicción suficientes sobre la comisión de una infracción. En este último caso, mediante orden escrita de Juez competente comunicada por medios fehacientes. La detención será una medida excepcional.

³⁸ Artículo 75. Principio que condiciona la detención.- Sólo puede ser detenido en casos de infracciones flagrantes o existiendo elementos de convicción suficientes sobre la comisión de una infracción. En este último caso, mediante orden escrita de Juez competente comunicada por medios fehacientes. La detención será una medida excepcional

³⁹ Artículo 86. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad sólo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción, que a juicio del Juez justifique las mismas.

⁴⁰ Artículo 87 (Aplicabilidad).- Las medidas privativas de libertad no son obligatorias para el Juez. Se aplicarán cuando configurándose los requisitos legales, no existan otras medidas adecuadas dentro de las no privativas de libertad. El Juez fundamentará los motivos de la no aplicación de otras medidas. Se tendrá en consideración el derecho del adolescente a vivir con su familia, y en caso que proceda la separación, a mantener contacto permanente con la familia, pareja, amigos, referentes afectivos y otros, si ellos no fueren perjudiciales para el mismo.

rehabilitación, para fortalecer precisamente en ese tiempo los derechos de los adolescentes infractores y prepararlos para la reinserción en la sociedad.

El Artículo 15d del CNA –llamado de *Protección Especial*– señala además la obligación del Estado de proteger especialmente a los niños y adolescentes a una serie de situaciones de violación a sus derechos humanos. Entre esas situaciones figura la de *“tratos crueles, inhumanos o degradantes”*.

Pero además en el Apartado *Medidas socioeducativas privativas de libertad*”, en el Artículo 89 del CNA se señala que *“El régimen de privación de libertad consiste en recluir al adolescente en un establecimiento que asegure su permanencia en el recinto, sin menoscabo de los derechos consagrados en este Código, las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales”*.

El Artículo 87 por su parte establece el derecho del adolescente a vivir con su familia, pero cuando por distintas circunstancias –como la privación de libertad- se vea impedido de hacerlo, el Estado debe garantizar el mantenimiento del contacto permanente entre el adolescente con su familia, amigos, parejas, referentes afectivos, etc., salvo cuando alguno de ellos pueda ocasionarle un perjuicio.

Frente al caso de un adolescente que desencadene una situación de peligrosidad manifiesta –Artículo 91-, se tomarán recaudos para la seguridad de la población sin perder de vista los objetivos de recuperación del infractor, por lo que se señala la necesidad de contar con funcionarios preparados especialmente, así como la aplicación de programas educativos.

La salvaguarda de los derechos de los adolescentes privados de libertad incluyen aspectos éticos como la señalada en el Artículo 96 cuando afirma que *“Queda prohibida la identificación de la persona del adolescente por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de la información sobre los hechos”*.

Dentro de los derechos específicos de los adolescentes privados de libertad está el de reclamar por cualquier violación a sus derechos humanos. El Artículo 100 del CNA establece dentro de los cometidos de los Jueces Letrados de adolescentes la de *“Vigilar los casos en los que han recaído medidas educativas dispuestas por sentencia ejecutoriada, hasta el término de su cumplimiento”*, así como la de *“visitar, por lo menos cada tres meses los centros de internación, dejando constancia en el expediente respectivo del resultado. Sin perjuicio de lo que antecede, podrá realizar inspecciones cada vez que lo considere oportuno”*. Se deja constancia que los Jueces deben dar cuenta a la Suprema Corte de Justicia si constatan irregularidades graves.

Por su parte en su Artículo 101 el CNA señala las responsabilidades de control de la autoridad administrativa –en este entonces el INAME, y hoy el INAU-, así como la de

información cada tres meses al Juez del cumplimiento de las medidas y de la evolución del adolescente.

2.1.2.2 Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

El 23 de junio del 2011 la Cámara de Senadores aprobó la Ley que creó el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente –en adelante SIRPA-. Este órgano fue creado por acuerdo de todos los partidos políticos con el fin de rehabilitar y reinserir a los menores infractores. Es un organismo desconcentrado, de carácter transitorio que sustituye al Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (SEMEJI) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Su dirección está compuesta por un Director junto a una Comisión Asesora intergubernamental integrada por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Educación y Cultura, de la Administración de Servicios de Salud del Estado, del Ministerio del Interior, y una Comisión Delegada con tres miembros de distintos partidos políticos con representación parlamentaria.

Se establece que el Ministerio de Desarrollo Social diseñará, coordinará y asegurará la existencia del programa de Inserción Social y Comunitaria, y el Ministerio de Educación y Cultura junto con el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública diseñarán y coordinarán el funcionamiento de proyectos de educación formal, no formal, y formación profesional. El Ministerio de Salud pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado diseñarán y coordinarán el funcionamiento del Programa de medidas Curativas (art 106 del CNA). El Ministerio del Interior deberá diseñar y coordinar todos los aspectos referentes a la seguridad externa de los establecimientos donde se desarrollen medidas privativas de libertad.

La Gerencia General Ejecutiva deberá dar cumplimiento a las decisiones emanadas de la Comisión Delegada y responderá ante ésta.

Dependen de la Comisión Delegada 5 proyectos 1) Programa de Ingreso Estudio y Derivación, cuyos técnicos serán quienes decidirán las derivaciones a los programas existentes. 2) Programa de Medidas Socioeducativas no Privativas de Libertad y Mediación, cuyos responsables deberán ejecutar las medidas socioeducativas a que refieren los artículos que van del 80 al 84 del CNA. 3) Programa de Medidas Privativas de Libertad y Semilibertad, que se encargará de ejecutar las medidas previstas en los artículos del CNA que van del 86 a 88. 4) Programa de Medidas Curativas, que ejecutará las medidas socioeducativas que expone el artículo 106 del CNA. 5). Programa de Inserción Social y Comunitaria, que deberá encargarse del

reintegro del adolescente a la sociedad, que comienza al egreso del adolescente del SIRPA.

La seguridad externa deberá contar con una guardia experta y exclusiva para atender a la seguridad externa de los centros de privación de libertad para los adolescentes infractores. Se creará un fondo de infraestructura el cual administrará la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En lo que corresponde a los recursos humanos el presupuesto deberá contemplar la creación y mejora de los 5 programas previstos en los artículos de esta ley.

Para la formación y capacitación de los técnicos existirá un fondo que estará a cargo del Centro de Formación y Estudio (CENFORES).

Capítulo III

Las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad en el SIRPA

3.1 El disparador mediático

En el mes de abril del año pasado, SAETA T.V. (Canal 10) presentó en su noticiero central de las 20.00 hrs. –en el espacio llamado *Subrayado investiga*-, una nota en la cual fueron entrevistados adolescentes infractores internados en el marco del SIRPA. En dichas entrevistas algunos de los adolescentes respondieron a las preguntas revelando situaciones de lo que podía considerarse violaciones a los derechos humanos.

A pocos días de conocerse esta propuesta periodística –y fundamentalmente por su impacto mediático-, en diversos espacios periodísticos la prensa consulta a algunas madres de los adolescentes entrevistados por Canal 10 en el SIRPA, las cuales informan sobre represalias tomadas por los funcionarios del centro de detención contra sus hijos, en especial contra los adolescentes que realizaron las denuncias.

Pero lo que nos parece más importante es destacar el efecto multiplicador que la difusión periodística aportó al tratamiento del tema, ya que dio inicio a un debate sobre el estado de situación en nuestro país en referencia a los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley, así como sobre los distintos niveles de responsabilidad (de la sociedad, de las familias de los adolescentes, de las autoridades del SIRPA, de los funcionarios, de los internos, del Estado, del sistema de detención y rehabilitación, etc.) en el tema.

A partir de las denuncias, la abundante información surgida aportó elementos que facilitaron el conocimiento y la profundización del tratamiento de algunos elementos del tema mostrando encuentros y desencuentros entre los distintos protagonistas del asunto.

La difusión periodística sobre los supuestos malos tratos en el SIRPA reveló los pormenores de un proceso comenzado mucho tiempo atrás.

3.2 El aporte de la prensa

A partir de la selección de los artículos de prensa y de su respectivo análisis entendimos conveniente realizar un ordenamiento cronológico de los cuestionamientos

al sistema de privación de libertad de los adolescentes en conflicto con la ley penal y privados de libertad. En este sentido ya en el año 1999 el Comité de los Derechos del Niño de la ONU había realizado un relevamiento de información sobre la situación de los adolescentes infractores en nuestro país y como consecuencia del resultado de esa actuación, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ordenó a dos jueces de Adolescentes el pronunciamiento sobre dicho documento. En su respuesta uno de esos jueces –la Dra. Graciela Berro-, decía que *“merece un renglón aparte el tema de las sanciones que puedan llegar a ser aplicadas por un educador (...) El trabajo del Comité de los Derechos del Niño observa que “las reglas no son claras y que cualquier funcionario puede establecer sanciones en forma arbitraria”. Por otra parte, expresa que dichas sanciones no se notifican al menor ni a su defensor y no hay derecho a efectuar descargos o recurrir contra las mismas”*.⁴¹

En setiembre de 2013 bajo el título *“Nuevas denuncias sobre la Colonia Berro. Interpretaciones encontradas”*, un artículo periodístico del Semanario *Brecha* hablaba de la profundización de las denuncias –de familiares de adolescentes privados de libertad y de exfuncionarios de Hogares y Centros-, sobre las condiciones infrahumanas y torturas que padecían los adolescentes internados en el Hogar *Ser*⁴² del SIRPA.

Si bien se informa en ese artículo que las autoridades del SIRPA dan cuenta de una investigación interna iniciada por dichas autoridades, éstas hablan de las denuncias como de un “boicot” contra las actuales autoridades del Sistema. Es de señalar que las denuncias se dirigen especialmente contra la Directora del Hogar, designada para ese cargo dos meses antes de efectuadas dichas denuncias.

Tanto esas denuncias como las investigaciones internas mencionadas informaban acerca de la situación de precariedad en la que se encontraban los internos del Hogar *Ser*, demostrando que poco o nada se había hecho para mejorar y dignificar la vida de los adolescentes reclusos, ya que las autoridades del INAU estaban obligadas por una sentencia de amparo que en 2008 demandó el sistema judicial por la situación en ese Hogar.

En octubre de 2013 en otro artículo periodístico titulado *“Separado del cargo por presunto abuso. Brazos gordos, vista gorda”*⁴³ se informa sobre la visita que Eric Sottas, -Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)-, hizo junto al Comité de los Derechos del Niño en los centros de detención de

⁴¹ Semanario *BRECHA*, Montevideo, 16 de mayo de 2014, pág. 8.

⁴² El Centro *Ser* es un centro de máxima seguridad de la Colonia Berro que está a cargo de menores infractores que han cometido delitos graves y de los que han presentado profundos problemas de conducta en otros centros.

⁴³ Semanario *Brecha*, 11 de octubre de 2013, pp. 18-19.

adolescentes. Según consta en el artículo de prensa, luego de esa visita Sottas reclamó a jueces y autoridades una actitud mucho más proactiva, afirmando además que en esos centros se carece de lineamientos claros en materia de rehabilitación. Señaló además la diferencia entre el Hogar *Ituzaingó* -donde durante el día los adolescentes están fuera de su habitación- y el Hogar *Ser*, al que comparó con la cárcel de Guantánamo.

Se señala que en abril de 2014 la Institución Nacional de Derechos Humanos -en adelante INDDHH-, inspeccionó el Hogar *Ser* y el Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino -en adelante CIAF-. Recogiendo algunos datos del Informe elaborado por la INDDHH, la periodista Eliana Gilet, señala que en el CIAF las adolescentes infractoras privadas de libertad “*sufren el triple de desidia de las autoridades: por ser presas, por ser adolescentes y por ser mujeres*”.⁴⁴

La periodista señala que la situación de las adolescentes empeoró en comparación con el Informe de la INDDHH de diciembre de 2013, ya que tres de las adolescentes que entonces estaban embarazadas, ya fueron madres y están encerradas con sus pequeños hijos. Estos tres niños se suman a otro pequeño que ya estaba encerrado con su madre cuando el Informe de diciembre del año anterior.

El artículo da cuenta de que posteriormente a la entrega de ese Informe, la INDDHH recibe denuncias de malos tratos de parte de los adolescentes del Centro *Ser*, de que en la visita de la INDDHH habían contestado las preguntas que sus integrantes les habían hecho. La INDDHH entregó esa información a cuatro Jueces de Menores, uno de los cuales derivó el caso al Juzgado Penal de Pando. Se solicitó que se hicieran las revisiones médicas, pero éstas fueron hechas mucho tiempo después y mediante un equipo del propio SIRPA -el actor denunciado-, lo que impidió constatar lo denunciado.

Por los antecedentes antes mencionados, las denuncias por presunta violación a los derechos humanos de sus hijos, realizadas por las madres de los adolescentes que fueron violentamente castigados luego de la entrevista de los periodistas del Noticiero *Subrayado* de Canal 10 realizada en abril de 2014, son significativas.

El Semanario informa además sobre el fuerte respaldo que un gran conjunto de organizaciones sociales dieron al INDDHH, fundamentalmente en apoyo al último Informe de esta Institución.. Este grupo de ONGs -que fue encabezado por el Comité de los Derechos del Niño-, presentó el 30 de abril de 2014 en conferencia de prensa un comunicado público, cuyo primer punto establecía “*El reciente Informe publicado por la Institución sobre las visitas realizadas en el año 2013 al sistema carcelario*

⁴⁴ Semanario *Brecha*, 17 de julio de 2014, pág. 12.

juvenil, una vez más corrobora el contenido de informes y recomendaciones que parte de la sociedad civil, junto a organizaciones internacionales viene desarrollando desde hace años".⁴⁵

Algunos días después, en la primera semana del mes de mayo, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay –en adelante FEUU-, y la Asociación de ex Presos Políticos del Uruguay –en adelante CRY SOL-, apoyaron dicho Informe de la INDDHH y se sumaron a las denuncias por la supuesta violación de los derechos humanos de los jóvenes infractores privados de libertad.

En este marco algunos denunciantes pidieron la renuncia de la dirección del SIRPA. Sin embargo el pedido de renuncia no contó con el apoyo del Sindicato Único de Trabajadores del INAU –en adelante SUINAU-, ni de la Central de Trabajadores uruguayos –en adelante PIT-CNT-, quienes afirmaron que el informe de la INDDHH es incompleto porque no tuvo en cuenta la opinión de los trabajadores, y porque desconoce los avances que ha tenido el sistema penal adolescente.

El cruce de acusaciones ha continuado en el tiempo. La última semana de setiembre de 2014 se informó que la Jueza Penal de Pando debía resolver –tras un año de investigación-, sobre siete pedidos de procesamiento para funcionarios del SIRPA en el marco de las numerosas causas por torturas y “tratos degradantes” a adolescentes infractores privados de libertad.

Un reciente artículo periodístico titulado “*Funcionarios del SIRPA en la justicia. Primera causa*”.⁴⁶ señala que se trata de la denuncia presentada en diciembre de 2013 por un ex funcionario y conocida como “la causa del video”. Dicha denuncia es acompañada de una filmación tomada con un celular donde se ve a otro funcionario –totalmente identificado-, golpeando fuertemente a un adolescente que está en el piso. Si bien había un pedido de prisión desde el 8 de agosto para este funcionario, la Jueza tenía 45 días para decidir.

La periodista de *Brecha* que firma este artículo recoge un dato del diario *El Observador* que señala que el fiscal de la causa habría solicitado el procesamiento sin prisión de seis de los acusados –entre los cuales está el de dos de los integrantes del Directorio del SIRPA en 2013-, aunque tipificándoles “abuso de funciones”.

La periodista de *Brecha* señala además que, discrepando con la tipificación, los abogados de los adolescentes denunciadores, no solamente señalan que el grado de responsabilidad de estos dos Directores excede largamente el “abuso de funciones”, sino que ambos fueron separados del cargo recién en mayo de 2014, por lo que los adolescentes que denunciaron los hechos en diciembre de 2013 tuvieron que

⁴⁵ Semanario *Brecha*, 9 de mayo de 2014, pág. 11.

⁴⁶ Semanario *BRECHA*, 26 de setiembre de 2014, pág. 5.

continuar conviviendo con los denunciados, y lo que es más grave en una relación de dependencia que continuó lesionando los derechos de los jóvenes.

Finalmente, y a modo de cierre del relato del proceso de los hechos, es importante dar cuenta nuevamente de la lógica perversa que llevó a que el Presidente del SIRPA y el Presidente del Sindicato de Funcionarios hicieran nuevamente un frente común para acusar al ex – funcionario denunciante de la llamada “causa del video”.

Según este artículo de prensa, si bien los acusados y las causas de violaciones a los derechos humanos de los adolescentes internados en el SIRPA son muchos, y los expedientes están separados, se tenía la esperanza de que se hiciera justicia.

3.3 El aporte de la Institución Nacional de Derechos Humanos

3.3.1 La protección de los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley penal privados de libertad. La actuación de la INDDHH.⁴⁷

⁴⁷ La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) -creada por Ley N° 18.446 de diciembre de 2008-, es un órgano estatal autónomo que funciona en la esfera del Poder Legislativo y tiene como objetivo fundamental la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y el Derecho Internacional.

Es un mecanismo complementario de otros ya existentes, destinado a otorgar mayores garantías a las personas en el goce efectivo de sus derechos y como custodia en cuanto a que las leyes, las prácticas administrativas y políticas públicas, se ajusten a las normas internacionales protectoras de los derechos humanos. Tiene como competencia la recepción de denuncias sobre las violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad, así como el deber de coordinar acciones con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario a efectos de optimizar esfuerzos.

Finalmente, es de destacar que como la INDDHH cumple también funciones de Mecanismo Nacional de Prevención –señalado en el Protocolo facultativo establecido por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes-, debe visitar y monitorear en forma sistemática los lugares de detención como custodia de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, e informar a las instituciones supranacionales.

Para el abordaje de este asunto analizamos tres documentos que la INDDHH presentó a los organismos internacionales que en el marco de la ONU están vinculados a la protección de los derechos humanos de las personas.

De dichos documentos tomamos concretamente lo referido a la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, así como específicamente lo vinculado a los derechos humanos de los adolescentes infractores privados de libertad.

Se trata del *Informe de la INDDHH* presentado al 109º *Período de Sesiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)* de 5 de setiembre de 2013; del *Informe de la INDDHH* presentado a la 52ª *Sesión contra la Tortura (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes)* de 11 de abril de 2014; y del *Informe de la INDDHH* presentado a la 68ª *Sesión del Comité de los Derechos del Niño (Convención sobre los Derechos del Niño)*, de 12 de mayo de 2014,

Los tres documentos comienzan con informaciones generales similares, entre las que se encuentra la que señala que *“La INDDHH expresa su satisfacción por los avances logrados en varios aspectos referidos a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que si bien no se mencionan en el presente informe, constan en el del Estado uruguayo”*.

En cuanto al *Informe de la INDDHH* de setiembre de 2013 presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se destaca la importancia de la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (IRPA), así como del Sistema Penal Adolescente (SIRPA), creado por Ley N° 18.771 de 1º de julio de 2011, como un órgano desconcentrado que tiene a su cargo todo lo relativo a la ejecución de las medidas socioeducativas para menores de edad en conflicto con la ley penal.

En lo que respecta específicamente a la adolescencia en conflicto con la ley penal privada de libertad la INDDHH señala la necesidad de que además de las reformas de la institucionalidad para la ejecución de las medidas socioeducativas, es prioritaria una reforma del sistema de justicia de menores, con eje en la prevención del delito y la rehabilitación, incentivando las medidas alternativas a la privación de libertad, considerando la reclusión como último recurso.

Cuestiona profundamente el encierro compulsivo, dando cuenta de que durante una visita realizada por la INDDHH al Centro “Ser” comprobaron que los jóvenes estaban encerrados entre veinte y veintitrés horas diarias, permitiéndoles quince minutos para el baño diario, así como una hora –dos veces por semana- para la salida al patio.

Además señala que aunque los centros de reclusión de adolescentes deben ofrecer permanentemente a los adolescentes apoyo educativo, los adolescentes entrevistados por los integrantes de la INDDHH informaron que las actividades con maestros y profesores de educación física son discontinuas y esporádicas. Consultadas las autoridades del Centro informaron que las horas docentes estaban asignadas pero eran lentos los trámites burocráticos para efectivizarlas.

Se deja constancia además de la preocupación de la INDDHH ante el elevado porcentaje de adolescentes internados que consumen psicofármacos con prescripción médica, aumentando dicha preocupación ante la ausencia de controles médicos, ya sean generales o psiquiátricos.

Otra de las denuncias que consta en dicho documento es la discrecionalidad en la aplicación de las sanciones, fortalecida además por la falta de información que tienen los adolescentes de los centros de reclusión acerca de las reglas de convivencia. La gravedad de la omisión de dicha información hacia los adolescentes se extiende a la mayoría del personal no técnico.

El presente documento concluye advirtiendo su preocupación ante la iniciativa de plebiscitar la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes infractores, lo que sería contrario a la normativa internacional a la que nuestro país adhirió, y además agravaría el problema penitenciario nacional.

En lo que respecta al *Informe* de la INDDHH de 11 de abril de 2014 presentado ante la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, allí se deja constancia primeramente que aunque la INDDHH ha realizado tareas correspondientes a la figura de *Mecanismo Nacional de Prevención*⁴⁸ (en adelante MNP), en nuestro país se creó un MNP en mayo de 2013, comenzando a funcionar en diciembre del mismo año.

En lo que a la adolescencia en conflicto con la ley privada de libertad refiere, la INDDHH recuerda primeramente la lentitud en la consideración de las normativas relativas al funcionamiento del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) creado por la Ley N° 18.771 de 1° de julio de 2011 y que todavía no ha comenzado a funcionar. Se señala que la estructura vigente -el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente- había sido señalado en dicha Ley como órgano desconcentrado de carácter transitorio en el marco del INAU.

El Informe la INDDHH señala que a partir de la Ley 18.777 que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 69, se creó un registro de antecedentes para

⁴⁸ Establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU).

adolescentes que cometen determinados delitos ⁴⁹, se aumentó el plazo para dictar sentencia en algunas situaciones, se creó la nueva figura pena de “tentativa de hurto” y se reformó el margen temporal para la aplicación de medidas cautelares –en especial la prisión preventiva-, llevándola de 60 a 90 días.

Se dice además que el Parlamento uruguayo aprobó una modificación del CNA por el cual se establece una clasificación de infracciones en graves y gravísimas y habilita un régimen especial en caso de infracciones gravísimas cometidas por adolescentes mayores de quince y menores de dieciocho años, que entre otras medidas, hace preceptiva la privación de libertad cautelar hasta el dictado de la sentencia y fija penas mínimas de doce meses. La Ley modificativa se aprobó a pesar de la postura contraria de la INDDHH con respecto a la iniciativa parlamentaria. Es de destacar que la propia Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores convocó el 14 de agosto de 2012 a la INDDHH para escuchar su opinión, que finalmente no fue tomada en cuenta. .

La INDDHH advirtió sobre el carácter regresivo de la nueva ley, entre otras consideraciones por el potencial aumento de la población adolescente privada de su libertad, con el consiguiente hacinamiento y riesgo de producirse situaciones de malos tratos.

El Informe de abril de 2014 advierte especialmente que las condiciones de hacinamiento de las adolescentes infractoras no solo no ha mejorado sino que han empeorado, recordando además que el plazo de 120 días que se le había dado al SIRPA para solucionar el problema de hacinamiento en el CIAF se había cumplido y nada se había hecho en respuesta a lo solicitado.

La fundamentación de base de la INDDHH para esa demanda afirmaba que *“Las condiciones en las que se encuentran son violatorias de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier tipo de detención”*.⁵⁰ Otra preocupación de la INDDHH es lo referido a la medicalización, ya que la mayoría de las adolescentes toman psicofármacos. En cuanto a las adolescentes que fueron recientemente madres se advierte sobre la fragilidad de su estado emocional y psíquico ya *“que pueden sufrir situaciones de depresión o estrés ante la situación que afrontan en su calidad de mujeres privadas de libertad”*.⁵¹

⁴⁹ Según la Ley, los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los dieciocho años o al cese de la medida.

⁵⁰ Ídem.

⁵¹ Ídem.

En el mismo documento se informa que a la fecha de presentación del mismo, el MNP ha realizado 29 visitas inspectivas (especiales y de seguimiento) a centros de internación dependientes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, y que como producto de las mismas se han presentado las recomendaciones respectivas.⁵² Luego de esas visitas el MNP realizó informes detallados sobre las mismas, las constataciones, observaciones y recomendaciones que eleva a las autoridades del SIRPA, a los que se adjuntó los informes particulares para las Direcciones de cada Centro visitado. Se deja constancia también en el documento de que el 28 de marzo de 2014 el MNP presentó a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes –a solicitud de ésta- un Informe detallado de todas las visitas realizadas hasta ese momento y las respectivas recomendaciones.

A pesar de las recomendaciones, en el documento que continuamos analizando se afirma que el Centro Ser no ha sido clausurado ni se ha reubicado la Colonia Berro. Con respecto al Centro Ser, el documento señala que el 14 de mayo de 2013 la INDDHH lo visitó por primera vez debido a noticias y denuncias de distinto origen que daban cuenta de violaciones a los derechos humanos de los adolescentes allí internados. Esta visita tuvo como objetivo conocer el número y la condición sanitaria de los adolescentes (en especial la atención médica y la medicación que tomaban), el personal asignado a la atención de los internos, y también las características del sistema de convivencia.

La INDDHH pudo constatar que tanto en lo referido a la planta física, la higiene, los planteos educativos y los recreativos, y el régimen de visitas, se vulneraban los derechos humanos de los jóvenes. Esto se agravaba por el sistema de sanciones arbitrario que se les aplicaba y porque además los adolescentes no conocían las reglas de convivencia.

El Informe de la visita dio cuenta de que *“En las condiciones que se encuentra actualmente el Centro SER, se verifican la vulneración del derecho a la dignidad, la integridad, salud, educación, recreación, cultura y participación (art. 9 art.89 y 92 del Código de la Niñez y Adolescencia, arts. 2 y 40.1 de la Convención de los Derechos del Niño ratificada por la ley Nro.16.137, art.10 del Pacto Internacional de Derechos*

⁵² En su detalle: 12 recomendaciones al Centro Ser (Colonia Berro); 8 al Centro de Ingreso Adolescente Femenino (CIAF); 12 al Centro de Ingreso Transitorio (CIT); 12 al Centro *Desafío*; 10 al Centro de Privación de Libertad (CEPRIL); 11 al Centro de Medidas de Contención (CMC); 14 al Centro de Diagnóstico y Derivación (CEDD-Burgues); 7 al Centro Sarandí (Colonia Berro); 9 al Centro *El Hornero* (Colonia Berro); 8 al Centro *Paso a Paso*; 5 al Centro *Cimarrones*; 8 al Centro *Ariel* (Colonia Berro), y 7 al Centro de Medidas Cautelares (CEMEC)..

*Civiles y Políticos ratificado por la Ley Nro. 13.751, art.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) ratificada por Ley Nro. 15.737. Específicamente se vulneran los derechos previstos en el art.102 del Código de la Niñez y Adolescencia, consagrados con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de la institucionalización y a fomentar la integración de los adolescentes a la sociedad”.*⁵³

En el Informe se dice que la INDDHH entregó al INAU una serie de recomendaciones entre las que figuran la fijación de un plazo no mayor a 120 días para el acondicionamiento de las instalaciones del Centro Ser; la fijación de un plazo no mayor a 90 días para la instalación de una policlínica médica permanente; y la fijación de un plazo no mayor a 60 días para establecer un lugar de visitas. Las tres acciones deben tener como objetivo el respeto a la dignidad de los adolescentes internados. Además se da un plazo de 60 días tanto para el diseño y la instrumentación de verdaderas medidas socio-educativas, como para la dotación de personal técnico y no técnico para el cumplimiento de dichos objetivos en ese Centro. Esto se complementa con la exhortación a reducir las horas de encierro de los adolescentes.

Finalmente se establece un plazo de 15 días hábiles para que todos los adolescentes internados sean notificados de las normas de funcionamiento y convivencia, así como las razones y los tiempos de cumplimiento en caso de sanciones, –con entrega de copia correspondiente; y el mismo plazo para comenzar a efectivizar el control estricto del desempeño del Grupo GEO en las requisas que se realicen en ese Centro, para evitar que se vulneren los derechos de los adolescentes con malos tratos y otras situaciones denigrantes.

Los días 22 y 25 de noviembre de 2014 la INDDHH realizó visitas al Centro Ser para verificar si se había dado cumplimiento a sus recomendaciones, pero constató que si bien se habían corregido algunos detalles (aspectos locativos, higienes), las medidas de fondo no se habían tomado. No se había cumplido con la instalación de la policlínica ni con el lugar de visitas. Tampoco se habían reducido las horas de encierro ni cambiado el abordaje socioeducativo, y no se habían registrado los procesos disciplinarios. Y aunque el Grupo Geo había dejado de intervenir, las requisas seguían teniendo el mismo patrón de atropello.

En el Informe se reclama de que *“además de las reformas de la institucionalidad para la ejecución de las medidas socioeducativas, es fundamental una reforma del sistema*

⁵³ Informe de la INDDHH de 11 de abril de 2014, cit. Pág. 21

*de justicia de menores, centrada en la prevención del delito y la rehabilitación, donde los jueces utilicen la privación de libertad realmente como último recurso, y limite lo máximo posible el uso de la prisión preventiva, estimulando el uso de las medidas alternativas a la privación de libertad”.*⁵⁴

A modo de cierre, el Informe da cuenta de que en el año 2013 la INDDHH recibió numerosas denuncias de funcionarios y ex funcionarios del SIRPA referidas a situaciones de maltrato a adolescentes internados en el marco del Sistema de Responsabilidad Adolescente, así como de severas irregularidades en la gestión (como por ejemplo designaciones de cargos de responsabilidad a funcionarios investigados administrativa y penalmente por malos tratos a los adolescentes). Las denuncias se complementan con el dato de que aquellos funcionarios que cuestionan los malos procedimientos que vulneran los derechos de los menores son intimidados (amenazas, represalias). Cuando la INDDHH ha informado a las autoridades del SIRPA sobre esas denuncias, la respuesta ha sido deslegitimar a esos funcionarios.

La INDDHH afirma que además ha recibido denuncias de los propios adolescentes internados, así como de sus familiares.

La importancia de lo expuesto en este Informe reside también en que da cuenta de que la INDDHH dio comienzo a denuncias frente a la justicia penal, avalada por el relevamiento de pruebas suficientes.

En lo que respecta al *Informe* de la INDDHH de 12 de mayo de 2014 presentado ante el Comité de los Derechos del Niño (Convención sobre los Derechos del Niño), el documento recuerda nuevamente lo manifestado por esa institución anteriormente con respecto a las inspecciones realizadas a los Centros y Hogares del SIRPA. A partir de dichas visitas se pudo comprobar que “... *la sumatoria de condiciones inhumanas de reclusión, como el encierro compulsivo, la falta de propuestas socioeducativas que limitan entre otros el derecho a la educación y los malos tratos proporcionados por parte del personal custodial, constituye en sí misma tratos crueles, inhumanos y degradantes*”.⁵⁵

El Informe señala que la INDDHH ha comenzado un diálogo con las autoridades del INAU y del SIRPA para la implementación de los cambios imprescindibles a efectuar

⁵⁴ Informe de la INDDHH presentado ante el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de 12 de mayo de 2014, pág. 24

⁵⁵ Idem. pág. 6.

en el sistema, desde una política pública diseñada y evaluada desde la perspectiva de los Derechos Humanos, es decir desde el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Para ello se afirma que *“esto implica no solo la elaboración de un plan integral, sino la profunda revisión del modelo custodial y su necesaria transición hacia una institucionalidad socioeducativa, dotada de recursos técnicos suficientes y de excelente nivel profesional, capacitados para la educación y la rehabilitación de los y las adolescentes”*.⁵⁶

Luego de señalar que la Institución constató a través del monitoreo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que muchos jueces no cumplen con las visitas periódicas dispuestas por el art. 100 del CNA, el Informe expresa que las conclusiones que aparecen en este documento, provienen de tres fuentes. De las consultas y denuncias recibidas por la propia INDDHH; la información relevada por el MNP y sus recomendaciones, y de los aportes realizados por organizaciones sociales y organismos gubernamentales presentados a la Primera y Segunda Asamblea Nacional de Derechos Humanos en setiembre de 2013.. Este último evento estuvo integrado por dos sesiones temáticas: una sobre *“Seguridad ciudadana y sistema carcelario”* y otra sobre *“Institucionalización, privación de libertad, medidas alternativas y medidas post encarcelamiento para adultos/as, niños, niñas y adolescentes”*.

El Informe advierte primeramente sobre la mediatización y sobrevaloración del tema de la seguridad en la última década, lo que según la INDDHH estimuló reformas legislativas con el resultado del aumento de la privación de la libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal. Reitera entonces lo dicho en el Informe que la INDDHH de 11 de abril de 2014 presentado ante la Convención contra la Tortura acerca de la aprobación de la Ley N° 18.777 llamada *“Adolescentes en conflicto con la ley”*, que entre otras disposiciones, crea los registros de antecedentes, aumenta de plazo para dictar sentencias en algunas situaciones, instaura la figura penal *“tentativa de hurto”*, e incrementa el tiempo de prisión preventiva. Recuerda también que la Ley se aprobó a pesar de que la INDDHH (convocada para dar su opinión ante el Parlamento) informara en contra.

En referencia específicamente al contralor de las medidas socioeducativas y a su contralor, el documento deja constancia de que la INDDHH comunicó el 19 de julio de 2013 a las autoridades del INAU y del SIRPA que la Institución había resuelto *“poner en conocimiento de los cuatro Jueces de Adolescentes la situación, en razón de la*

⁵⁶ Idem. pág. 6.

*competencia que les otorga el Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto al contralor del debido cumplimiento de la medida socio-educativa”.*⁵⁷

Y destacando la gravedad de algunas situaciones sobre el incumplimiento de dichas medidas en el marco del SIRPA, el Informe da cuenta de que el 7 de noviembre de 2012 la INDDHH recibió una información de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y de la Comisión de derechos Humanos de la Junta Departamental de Maldonado acerca de la desaparición la noche del 4 de octubre de 2012 –en el marco de un motín-, de un adolescente luego de fugarse del Centro *Cerrito* de la Colonia Berro. Si bien el INAU comunicó el hecho a la Seccional de Policía y a la Sede Judicial respectivos, no realizó ninguna investigación interna para señalar responsabilidades. Enterada de la omisión del INAU, la INDDHH exhorta a esa institución a realizar la investigación para lograr ubicar al adolescente, así como para precisar las responsabilidades institucionales. Pero el INAU volvió a incumplir, dejando en evidencia la gravedad de la desaparición de un adolescente bajo custodia estatal.

El Informe detalla la actuación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura, dando cuenta de los objetivos (vigilancia del respeto a los derechos humanos y la dignidad de los menores privados de libertad) de las visitas a los centros de privación de libertad de adolescentes infractores, así como de los resultados de las mismas. Entre otros señalamientos se reitera lo dicho en el Informe anteriormente mencionado en cuanto a la vulneración de los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad en el Centro *Ser*, refiriendo nuevamente a las normas establecidas por la CNA.

Se reitera en el documento el detalle de las inspecciones, exhortaciones y recomendaciones formuladas al Centro *Ser* en junio de 2013, así como los cumplimientos a medias y no cumplimientos del SIRPA en este tema.

Si bien se reconocen algunos avances en general, el Informe señala la cantidad y gravedad de problemas que aún quedan por resolver, precisando los grupos sobre los que se debe priorizar: las adolescentes mujeres, los varones comprendidos entre los 13 y los 15 años y los que se encuentran internados en los centros de máxima seguridad.

Finalmente el documento advierte que *“el hacinamiento, el tiempo de encierro excesivo, la falta de actividades estables y sostenidas, la falta de educación*

⁵⁷Idem. pág. 13.

*permanente, la ineficiente e incompleta registraci3n de las actividades, la heterogeneidad de criterios sancionatorios y de atenci3n en salud, la insuficiente formaci3n de las personas que est3n en contacto directo con la poblaci3n internada, los tratos abusivos por parte de algunos funcionarios y la discrecionalidad procedimental, son algunas de las deficiencias m3s relevantes que se han detectado y que es necesario erradicar".*⁵⁸

⁵⁸ Idem. p3g. 18.

CAPÍTULO IV

Claves teóricas para el análisis

4.1 El sistema penal juvenil uruguayo

La percepción de que en nuestro país el Sistema Penal Juvenil –en adelante SPJ-, está en una crisis continua, y que los intentos de cambios o reformulaciones a lo largo del tiempo no han sido eficaces, es generalizada.

Las hipótesis de quienes lo han cuestionado y cuestionan han sido variadas, y los planteos de solución – cuando las propuestas han sido aplicadas-, no han modificado la realidad.

Los cuestionamientos han sido –según la ocasión- dirigidos hacia los tres niveles del S.P.J. (Policial, Judicial y Ejecutivo) simultáneamente o hacia alguno de ellos en particular. Esta especie de cruce de demandas de responsabilidades con respecto a lo que no parece estar funcionando en el sistema –o en alguno de sus tres niveles-, se ha dado tanto a partir de cuestionamientos desde personas ajenas al S.P.J. como entre las personas que pertenecen a alguna de esas tres dimensiones.

En ambos casos las propuestas de solución se hacen desde una visión compartimentada de la realidad sobre la cual debe trabajar el S.P.J..

La necesidad de una mirada integral que suponga el abordaje teórico y práctico de esa realidad para actuar e ir corrigiendo lo que funciona mal o no funciona, generalmente no aparece ni de parte de los actores del Sistema, ni de los legisladores, ni de la propia sociedad.

Consideramos acertada entonces la afirmación de que *“el sistema carcelario juvenil en los últimos años se ha constituido en un ámbito en el que se desarrollaron y desarrollan importantes conflictos interinstitucionales”*.⁵⁹

Como han manifestado algunos actores y espectadores, a la hora de buscar soluciones muchas veces se ha recurrido al cambio de nombre de las instituciones que están a cargo de los menores infractores privados de libertad, sin atender a las causas estructurales del problema.

En este mismo sentido hemos tenido también las objeciones y demandas de algunos grupos políticos -apoyados por algunos sectores de la sociedad- para bajar la edad de imputabilidad penal de los adolescentes.

El tema es complejo no solamente porque el Sistema ha acumulado errores e improvisaciones durante mucho tiempo, sino porque cuando las situaciones críticas –

⁵⁹ Movimiento Nacional Gustavo Volpe/UNICEF, ob. cit. pág. 9.

percibidas real o mediáticamente- aumentan, las omisiones y responsabilidades del sistema quedan mucho más en evidencia. Como señalan Carolina González y Sandra Leopold *“Este debate sintomático da cuenta de la crisis permanente del sistema que sobrevive a sí mismo cambiando de nombre, o de institucionalidad, sin responder a la pregunta que da origen a su ineficiencia para gestionar con acierto el problema al que busca dar respuesta”*⁶⁰

Tal vez porque tantos quienes ven la solución a los problemas en un cambio de nombres de las instituciones o quienes ven en la rebaja de edad de imputabilidad penal adolescente parten de un análisis parcial o equivocado de las causas de las deficiencias observadas.

Primeramente porque la realidad que abarca en S.P.J. es compleja y heterogénea. En segundo lugar porque los actores involucrados generalmente evalúan esa realidad casi exclusivamente desde su lugar. Y en tercer lugar porque las propuestas de solución carecen muchas veces de información sobre situaciones y acciones previas. Como afirman las autoras antes mencionadas *“... ausencia de acumulación teórica y programática acerca de la temática en cuestión, falta de transparencia y de información acerca de la aplicación de la política penal, impiden una correcta evaluación.”*⁶¹

4.1.1 Sistema Penal Juvenil y Derechos Humanos

De acuerdo al CNA, la ejecución de la privación de libertad es de responsabilidad exclusiva, irrenunciable e indelegable del Estado, quien a través de un organismo especializado del INAU se hace cargo de la internación de los adolescentes infractores a efectos de aplicar las medidas correspondientes de acuerdo a la decisión judicial. Como también el Código lo señala, la ejecución de la pena corresponde a la aplicación de *medidas socioeducativas*.

La existencia de situaciones de violación de los derechos humanos de los adolescentes infractores privados de libertad en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente –denunciadas recientemente-, da cuenta de la incoherencia entre el marco normativo específico de la legislación uruguaya y la respuesta del Sistema Penal Juvenil, especialmente de su nivel o segmento ejecutivo.

⁶⁰ González, Carolina, Leopold, Sandra, *“DE CRISIS Y REFORMAS. El actual funcionamiento del sistema penal juvenil en Uruguay desde la perspectiva de sus actores y expertos”*, en González, Carolina, Leopold, Sandra, López, Laura, Martinis, Pablo (coordinadores) (2013), *Los sentidos del castigo. El debate uruguayo sobre la responsabilidad en la infracción adolescente*, Montevideo, Ed. Trilce, pág. 48.

⁶¹ Idem. pág. 56.

Como se señala en la investigación del Movimiento G. Volpe/UNICEF *“todas las contradicciones del poder punitivo se exaltan cuando sus objetos son los adolescentes: la inhumanidad, la ineficacia preventiva, la violencia y la selectividad”*.⁶²

Ya desde que es captado por las agencias policiales –primera etapa del proceso criminalizador-, el adolescente infractor es objeto de una serie de intervenciones en el marco del S.P.J. que lesionan sus derechos humanos, ya que si bien la *selectividad* es inherente al proceso criminalizador, *“esta inevitable selectividad estructural provoca una distribución de las intervenciones que —como se ha mencionado— alcanza solo a quienes tienen bajas defensas frente al poder punitivo y devienen más vulnerables a la criminalización”*.⁶³

Las vulnerabilidades y el desamparo social que llevan a cuevas desde antes de su nacimiento, se profundizan a partir de su ingreso al SPJ, al ser los receptores de las respuestas que con distinto grado de violencia reciben del poder institucional. Lo que agrava además la estigmatización social de la que son objeto, ya que además del generalizado maltrato policial, reciben el de quienes teniendo la obligación de reeducarlos o rehabilitarlos no solamente desde el punto de vista físico sino psicológico, violan sus derechos humanos. .

A la exclusión en que vivían antes de ser privados de libertad, pasan a vivir otro tipo de exclusión determinado por las características y condiciones del espacio asignado para ser “rehabilitado” o “reeducado”. En este sentido Morás señala que *“Cuando la persistente lejanía respecto a la consumación de mínimos derechos esenciales los aproxima a la violación de un marco normativo que no los incluye, se intenta mediante una pena exigir su responsabilización y rehabilitación en instituciones que muestran innumerables limitaciones para lograr ambos fines”*.⁶⁴

El Dr. Carlos Uriarte, que trabajó profundamente el tema de la vulnerabilidad de los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad, explica claramente la relación existente entre vulnerabilidad e infracción. Recuerda que la palabra *vulnerabilidad* entra a nuestro país junto con la doctrina de la protección integral de la niñez-adolescencia de la ONU, señalando que las discusiones acerca de qué tipo de adolescentes serían los que el sistema penal juvenil debería controlar comenzaron a partir de 1985. Uriarte afirma que desde ese momento el tema de la adolescentes en conflicto con la ley inspiró propuestas para bajar la edad de imputabilidad penal adolescente.

⁶² Movimiento Nacional Gustavo Volpe/UNICEF, op. cit. pág. 26.

⁶³ Idem. pág. 25.

⁶⁴ Morás, Luis Eduardo, *“A modo de presentación”*, en González, C. Leopold, S., López L., Martinis, P. (coordinadores), op. cit. pág. 12.

Los intentos legislativos para sacar de la órbita del sistema institucional de justicia juvenil el control de la niñez-adolescencia infractora no prosperaron, pero existen normas que han transformado la legislación nacional para adecuarla a las normas internacionales en el tema de la protección integral de los derechos de niños y adolescentes. Señala además que no han seguido una línea coherente ya que *“El Código de la Niñez y la Adolescencia, que tiene falencias en lo que refiere a la definición de la infracción juvenil, redefine a las viejas “medidas de seguridad educativas” del Código Penal, o de “vigilancia y protección” del Código del Niño, como “medidas socio-educativas” y presenta –a nuestro juicio- una nueva versión del magma abandono-infracción”*.⁶⁵

Aunque la normativa actual – C.N.A.-, en el marco del nuevo concepto de la normativa internacional en la materia, proclama la doctrina de la protección integral, el SPJ – especialmente en el nivel o segmento ejecutivo-, sigue respondiendo de alguna manera a lo viejos conceptos. Como advierte Uriarte *“Si el marco que encarta la vinculación con nuestro interlocutor en infracción es la prevención (que nos prevenimos de él), producimos su virtual desintegración, pues lo miramos desde una estrecha ventana (el crimen), a partir de la cual accedemos a una fragmentada información de su vida (sólo nos interesa lo que nos explica el crimen), que lo hace diverso a nosotros...”*.⁶⁶

Esa es exactamente la percepción de quienes han tenido contacto con los jóvenes privados de libertad que cumplen condena en los centros u hogares del SIRPA.

Para muchos funcionarios operativos de estos espacios institucionales, el encierro es una medida que evita las situaciones “peligrosas” que podían crear –individual o colectivamente- estos adolescentes. El encierro sería una forma que intenta legitimar las acciones o medidas que se aplican en esos lugares para impedir las potenciales agresiones de esos jóvenes “peligrosos”. Esto da lugar a una penosa realidad, ya que *“los espacios negros interparcelarios dentro de esa versión del otro, resultan llenados, aunque no lo digamos, por la peligrosidad y su correlato existencial del miedo”*.⁶⁷

Los modos de relacionamiento de los funcionarios operativos e incluso de las autoridades del SIRPA parecen partir de la base de considerar al adolescente como una unidad descontextualizada, por lo que el delito cometido sería producto solamente de la voluntad del adolescente infractor.

Nuevamente Uriarte nos advierte sobre las viejas concepciones todavía vigentes cuando afirma que *“La infracción (el delito), que la criminología tradicional ha reducido*

⁶⁵ Uriarte, Carlos, *Vulnerabilidad, privación de libertad de jóvenes y Derechos Humanos* (2005), Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, pág. 23.

⁶⁶ Idem. pág. 27.

⁶⁷ Idem. pág. 27.

*a un dato natural observable, estudiable, combatible, no se entiende sin la mirada hacia el sistema que la define, la sociedad que la encarta y cómo resuelve sus problemas; el crimen no puede cientificarse sin socializarlo, politizarlo o filosofarlo. Esa complejidad sólo puede visualizarse en un paradigma”.*⁶⁸.

Como afirmábamos anteriormente, los tres niveles del S.P.J son cuestionados en momentos en donde se hace visible por algún hecho o acontecimiento puntual, las deficiencias del Sistema.

Las denuncias sobre tortura, violencia, procedimientos irregulares, infraestructuras inadecuadas, procedimientos administrativos burocratizados, etc., dieron lugar – además de a acusaciones cruzadas-, a visibilizar un caso claro de violación de los derechos humanos de los adolescentes infractores privados de libertad.

Lo que constituye además una flagrante violación a la normativa internacional y nacional vigente, ya que *“los derechos humanos de la infancia y la adolescencia constituyen un marco jurídico para el reconocimiento de su especificidad, que actúa como un límite al sistema penal”.*⁶⁹

4.1.2 Los adolescentes en conflicto con la ley penal privados de libertad en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

4.1.2.1 Lo que “traen”

Las historias de vida de la casi totalidad de los adolescentes en conflicto con la ley penal privados de libertad –y que directa o indirectamente recoge parte de la bibliografía consultada para esta Monografía -, dan cuenta de la ausencia de estructuras familiares que haya brindado a esos adolescentes la contención y la protección necesarias a que tenían derecho.

En este sentido nos pareció importante tomar como referencia los resultados de una investigación que en el año 2008 el Movimiento Nacional Gustavo Volpe presentó junto con Unicef. El producto de esa investigación es un libro llamado *Privados de libertad. La voz de los adolescentes* que recoge un trabajo de campo realizado entre 2005 y 2007. El trabajo toma como insumo relevante el aporte de los propios

⁶⁸ Idem. pág. 36

⁶⁹ Movimiento Nacional Gustavo Volpe/UNICEF, op. cit. pág. 30.

adolescentes privados de libertad acerca del conocimiento de esos jóvenes sobre su situación procesal y de cómo vivían la cotidianidad de la privación de libertad.⁷⁰

El trabajo se propuso “conocer en alguna medida la configuración de la realidad social en la que se encuentran inmersos, para saber quiénes son los adolescentes que nos hablan. Se trata de superar la contemplación única de sus carencias, resabio de las doctrinas de situación irregular, de claro corte asistencialista, para poner énfasis en sus capacidades y responsabilidades”.⁷¹

Es en este sentido que nos parece pertinente el análisis de la investigación del Movimiento Nacional Gustavo Volpe/UNICEF, - a pesar de que el período elegido para nuestro objeto de estudio fue 2013 – 2014-, ya que el resultado del trabajo de la presente monografía da cuenta de que la situación en cuanto a la vulneración de los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad en el SIRPA, no ha cambiado.

A manera de consideraciones generales, el trabajo señala en cuanto al sexo, que la mayoría de los adolescentes privados de libertad son varones (95%), que en cuanto a la edad, la mayoría se concentra en los 17 años, y en lo que refiere al departamento de residencia, un 73% viven en Montevideo y el 27% en el interior del país. .

Todos ellos son adolescentes que vienen de experiencias vitales dolorosas, por lo que han sufrido doblemente la inestabilidad emocional de ese período de la vida. Por un lado en lo que respecta a la especificidad de las adolescencias en el mundo actual y por otro lado que estos adolescentes han vivido y viven la pobreza, la marginación y la exclusión.

Esta situación de vulnerabilidad se expresa claramente en los datos obtenidos por los investigadores referidos a las historias de vida de esos adolescentes infractores privados de libertad, y a los contextos de donde provienen.

Con respecto al barrio donde residen, la gran mayoría provienen de barrios caracterizados como de estratos bajos y muy bajos, con niños y adolescentes en situación de pobreza expresada en altos índices de “desnutrición, retraso de crecimiento, fracaso escolar y deserción educativa”⁷²

En cuanto al núcleo familiar, el 49% de los adolescentes proviene de hogares monoparentales -en general con jefatura materna-, mientras que el 32% convive con ambos padres y un 11 % con otros familiares, en general hermanos o abuelos. Hay un 3% que vive con otras personas que no forman parte de su núcleo familiar, 2% dice

⁷⁰ Desde el punto de vista metodológico se aplicaron dos técnicas: a) la aplicación de un formulario de encuesta (con preguntas cerradas y abiertas) y b) la realización de grupos de discusión. Se aplicaron 143 formularios que correspondía al 83% de los internos.

⁷¹ Movimiento Nacional Gustavo Volpe/UNICEF, ob. cit. pág. 25.

⁷² Idem. pág. 29.

tener familias extendidas, que incluyen a otro familiar además del núcleo básico, y un 4% no tiene núcleo familiar.

Los autores advierten sobre la gravedad del hecho de que la mayoría de los padres o responsables de esos jóvenes estuvieran ausentes durante el proceso penal de éstos, ya que ello redundaría en una mayor vulnerabilidad de los adolescentes, ya que ese dato muchas veces sirve de fundamentación para que la Justicia recurra a las medidas privativas de libertad. La falta de contención y/o desintegración familiar sirve muchas veces como argumento para la protección estatal institucionalizada.

En referencia al *nivel educativo*, la investigación señala que un 67% tiene educación primaria completa, y que un 33% no completó sus estudios primarios, y en cuanto a la *actividad laboral*, un 53% manifestó haber trabajado en alguna oportunidad, y en la mayoría de esos casos en trabajos informales y el resto expresó no haber trabajado nunca.

Como señala Marcelo Viñar, en medio del *vértigo civilizatorio* actual, los adolescentes no encuentran un referente sólido, necesario para conformar su propia identidad, su subjetividad. La prisa, la inmediatez, la fragilidad de una realidad en la que no se pueden reconocer impiden la construcción de un proyecto de vida en esa etapa dinámica de su trayecto vital. Por eso *“cuando esta experiencia de frondosa turbulencia es desértica, aparece la patología de aislamiento, de la soledad y de la desolación. Es una clínica del tedio o de la experiencia de vacío...”*⁷³. Y advierte que la causa de esta situación puede provenir de conflictos internos que se encuadren en una patología psíquica, pero también puede derivar de causas externas como la pobreza y la exclusión social.

De ahí que esa “experiencia de vacío” sea más traumática para los adolescentes infractores, y en especial para aquellos que reciben la condena de la privación de libertad. Porque ellos han vivido en contextos de vulnerabilidad desde su nacimiento, por la pobreza y la exclusión social que han experimentado y que se ha expresado en la marginalidad que –como señala Viñar- ha convertido al excluido en un *“sujeto político sin derecho a tener derechos”*.⁷⁴

Viñar agrega además que la marginalidad y la exclusión deben comprenderse a partir de considerarlas como resultado *“de carencia, de despojo y de infamia, y nuestro deber es pensar cómo revertir su dimensión frustrante, buscando alimentar un destino de creación”*.⁷⁵

⁷³ Viñar, Marcelo, ob.cit. pág. 32.

⁷⁴ Idém. pág. 37.

⁷⁵ Idém. pág. 88.

La marginalidad y la exclusión no son el resultado de la voluntad del sujeto que en soledad decide serlo, sino la consecuencia de la marca que han dejado en él los códigos y claves familiares y culturales en su proceso vital.

Esa vulnerabilidad es la que ha llevado a esos adolescentes a conductas violentas, pero como afirma Viñar, no debemos de hablar de violencia adolescente en general, sino que tenemos que ubicarla en el tiempo y en el espacio a partir del análisis del contexto en donde se generó la actitud violenta de ese adolescente. Porque el impulso violento existe en cada ser humano, pero la intensidad de ese impulso y las consecuencias del mismo no son las mismas para todos. El impulso violento existe en la mente de todos los seres humanos como idea o representación pero es necesario entender *“el puente que transita entre acto psíquico y acto material, el enunciado de los factores –saludables o patógenos- que activan o bloquean este pasaje entre el sujeto que fantasea y el que actúa”*.⁷⁶ Comprender la incongruencia entre pensamiento y acción entre la idea y el acto violento no es fácil, salvo que se busquen las causas no solamente poniendo el foco en quien cometió la acción violenta sino en el contexto temporal y espacial donde interactúan los factores familiares, sociales y culturales de ese individuo.

Viñar nos recuerda que *“... la tendencia antisocial tiene su caldo de cultivo en una infancia desvalida, Valente de referentes identificadorios saludables, donde la insensibilidad ante el dolor del prójimo es la respuesta en espejo a la penuria padecida crónicamente en la miseria de la exclusión”*.⁷⁷

Estas conductas de riesgo en los adolescentes interpelan permanentemente a padres, docentes y estadistas que, sin encontrar respuestas de solución recurren a psicólogos, psiquiatras o psicoanalistas con la consecuencia muchas veces de la psiquiatrización y/o judicialización del adolescente infractor. Viñar advierte sobre las pericias psiquiátricas en cuyos resultados se apoya un juez para condenar a un adolescente, ya que dichas pericias *“buscarán medir su normalidad y sus desviaciones, su cociente intelectual normal o descendido, sus test de personalidad que deberá suplir las exigencias del diagnóstico de normalidad o anormalidad, monto, ansiedad, tendencia al pasaje al acto, peligrosidad”*⁷⁸, focalizando en el estallido y no buscando en las claves de la peripecia de vida del adolescente infractor, en su historia y en su entorno. Para Viñar *“el acto violento es más un acto de desorientación, de derrumbe de sentido, que un mensaje de protesta. Este requeriría la construcción de una*

⁷⁶ Idém. pág. 71.

⁷⁷ Idém. pág. 113.

⁷⁸ Idem. pág. 93.

*intencionalidad en una conducta propositiva, cuya falta o falencia es justamente el problema que debemos abordar e interrogar”.*⁷⁹

4.1.2.2 Lo que “reciben”

De acuerdo a lo establecido en el CNA, cuando el juez dispone para el adolescente infractor de la ley penal el cumplimiento de la pena en régimen de privación de libertad, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente es el responsable de la ejecución de las llamadas medidas socioeducativas. Como dijimos anteriormente, para ello el SIRPA cuenta con varios Centros u Hogares, que más allá de sus especificidades, integran un sistema que ha sido y es permanentemente cuestionado por no cumplir con los objetivos establecidos para su creación. Tanto las denuncias de los organismos internacionales encargados a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como de los organismos nacionales como la INDDHH, así como también de ONGs .dan cuenta de violaciones a los derechos humanos de los adolescentes infractores privados de libertad. Por acción u omisión la gestión de los Centros u Hogares del SIRPA se ha apartado de las normativas internacionales y del CNA en nuestro país.

El CNA establece que las medidas socioeducativas –consideradas como último recurso y por el período más breve que proceda-, tienen como finalidad preservar el interés del adolescente, mientras que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores dispone en su art. 14 que la pena en el marco de la privación de libertad debe sustanciarse en un ambiente de comprensión que habilite al adolescente a expresarse y participar libremente.

Como se afirma en la investigación del Movimiento Volpe/UNICEF, la vigilancia del cumplimiento de los deberes del SIRPA por parte del Poder Judicial Juvenil no es constante. Los autores informan que otro de los temas que consultaron a los adolescentes fue sobre la *figura del juez*, ya que además de que se señala en el art. 76.1 del CNA el plazo para que los agentes policiales que detienen un adolescente deban comunicarlo al juez competente, el art. 100 del referido Código establece que los jueces deben realizar el control de las medidas por ellos impuestas, así como el seguimiento de las medidas socioeducativas-, así como la recepción de reclamos de

⁷⁹ Idem. pág. 128.

los adolescentes. Se establece que para ello el juez podrá realizar las visitas que entienda conveniente, pero a texto expreso se afirma que tendrán la obligación de realizar por lo menos una visita cada tres meses a los centros de privación de libertad y registrar el resultado de esa visita en el expediente respectivo..

En este sentido la investigación Volpe/Unicef presenta su preocupación por lo escasa de esas visitas de vigilancia, control y seguimiento, ya que de todos los adolescentes consultados un 82% manifestó no haber recibido visita de juez durante el tiempo de privación de libertad, y sólo un 12% expresó haberla recibido. Esta situación aumenta la vulnerabilidad de los adolescentes, ya que se trata de una desprotección importante.

Según dichos investigadores, a ello se agrega el hecho de que muchos de los adolescentes privados de libertad no tenían sentencia aún (73%) , por lo que en el marco de las medidas cautelares, permanecían internados junto a los adolescentes que estaban cumpliendo sentencia de condena (27%).

Otra situación preocupante que destaca la investigación es lo referente al *contacto de los adolescentes privados de libertad con sus familias*, ya que el artículo 87 del CNA refiere específicamente al derecho del adolescente a vivir con su familia y, cuando proceda la separación, a mantener contacto permanente con ella, con su pareja, amigos, referentes afectivos y otros, ya sea a través de visitas o de correspondencia. De no poder hacerlo, las consecuencias son perjudiciales para él. Además ese contacto favorece de alguna manera la minimización de los impactos dañinos del encierro.

De los adolescentes privados de libertad entrevistados, un 86% dice recibir visitas y un 14% dice no hacerlo. Además es notable la diferencia entre los adolescentes que provienen de Montevideo y los que provienen del interior del país, ya que éstos últimos son los que reciben menos visitas muchas veces por la falta de recursos de sus familiares para trasladarse. Esto configura otro incumplimiento con respecto al CNA, ya que en el Código se señala expresamente que su reclusión debe cumplirse en centros cercanos al lugar de residencia del adolescente internado.

Otro dato proporcionado por la referida investigación es que quienes más los visitan son las madres, con un 54% de los casos. El 26% recibe la visita de ambos padres y el 6% solo del padre.

Otra limitación al derecho de los adolescentes es en cuanto a la *posibilidad de hacer llamadas telefónicas*. Aunque los criterios dependen de cada centro de privación de libertad, generalmente se les permite realizar de una a tres llamadas de tres minutos una vez por semana, y en muchos casos en presencia de los funcionarios quienes hacen el contacto telefónico y controlan el tiempo de la comunicación.

En cuanto a las *salidas autorizadas judicialmente*, el 72% de los adolescentes privados de libertad no han tenido licencias durante el cumplimiento de su medida. Esto también es preocupante ya que ellas son importantes para impedir la desocialización provocada por el encierro, y facilitar la instancia futura de desinstitucionalización.

Estas situaciones profundizan el desarraigo de quienes por la situación que viven necesitan el apoyo afectivo.

Pero tal vez uno de los temas claves de la investigación que venimos analizando sea la percepción de los adolescentes acerca de cómo viven la privación de libertad.

Recordando que la privación de libertad en cuanto medida socioeducativa significa por sí misma una limitación muy importante al ejercicio de los derechos de las personas, tanto el CNA como las normas internacionales referidas a la protección de los derechos humanos de niños y adolescentes establecen expresamente, que además de ser considerada como último recurso, dichas medidas deben tener como objetivo la habilitación de instrumentos o herramientas para la rehabilitación para la reinserción de los adolescentes infractores en la sociedad.

Sin embargo los centros del SIRPA potencian las consecuencias negativas de la privación de libertad, ya que en los adolescentes *“dejan marcas en sus saberes, sus vínculos y sus propios cuerpos”*.⁸⁰

Es deber de las instituciones de privación de libertad brindar enseñanza formal para preparar a los jóvenes para facilitarles la obtención de un empleo cuando cumplan la pena.

Cuando los autores de la investigación les preguntaron sobre las *actividades del encierro* –es decir sobre la esencia de las llamadas medidas socioeducativas-, los testimonios de los jóvenes, más allá de las experiencias personales, dieron cuenta de una vida “vacía”, sin significado, sin contenido. Esto se ve ratificado ya que el 73% de los adolescentes entrevistados dijeron no estar desarrollando ninguna actividad educativa, pero además por lo manifestado en el espacio de preguntas abiertas que buscaban que los propios adolescentes hablaran de la forma en que vivían la cotidianidad en la privación de libertad. Por lo dicho lo dicho anteriormente, los investigadores pudieron dar cuenta del “imaginario colectivo” de los jóvenes en este tema.

El común denominador de las respuestas consistió en que la pesada rutina giraba en *“comer y dormir”*, sin mencionar actividades socioeducativas. Dormir funciona como una forma de evasión de la realidad. El poco resto de tiempo se empleaba en *“ver televisión, escuchar radio y pensar”*. Varios adolescentes manifestaron dormir mucho

⁸⁰ Movimiento G. Volpe/UNICEF, ob. cit. pág. 57.

porque *“tomaban pastillas”*. Pastillas *“para dormir”* y *“para la ansiedad”*, y porque durmiendo *“mataban el tiempo”*, y para no pensar *“en la fuga”*. El porcentaje de adolescentes internados que *tomaban psicofármacos era de un 93%*.

Viñar advierte sobre la gravedad de las prácticas que desde la Psiquiatría consideran los fracasos como algo anormal, definiendo *“lo normal como calmo... y la transgresión como patología”*.⁸¹ Agrega además que *“... junto con la estructura psicopatológica del afectado, es menester considerar su historia familiar, contemporánea y transgeneracional, y la coyuntura sociocultural de los espacios de pertenencia”*.⁸²

Para muchos adolescentes consultados por los investigadores, los psicofármacos los *“duermen”*, con lo que les *“achica el tiempo”*, destacando en su rutina diaria el ocio, la ausencia de actividades y el encierro.

La constante es el *“aburrimiento”*, la falta de actividades. Según los investigadores, las propuestas de actividades varían según los establecimientos, ya que algunos las formulan de forma planificada y sistemática, mientras que en otros no existen. El ocio es la constante, pero además en el tiempo libre la oferta es ver televisión o caminar por el patio, pateando alguna pelota de fútbol de vez en cuando.

En este sentido, a la restricción de derechos que supone la privación de libertad se le suma entonces las deficiencias de las actividades socioeducativas, no solamente con el objetivo de fortalecer o terminar la escolaridad, sino también en prepararlos en profesiones u oficios para la inserción o reinserción laboral al momento de egresar del SIRPA. Interrogados acerca de los estudios, la participación en talleres u otras actividades que les ofrezca el establecimiento donde se encuentran, el 73% manifiesta no estar desarrollando ninguna actividad educativa.

Y además es importante pensar en lo que viene después de que ese joven logre salir del centro en que estuvo privado de libertad, ya sea por cumplir la pena o por fugarse. Generalmente vuelve *“a la calle”*, donde –sin contención ni protección–, se dan las condiciones para volver a delinquir, porque la estigmatización social que pesó para su captura se incrementa al salir del sistema.

La percepción negativa de la sociedad para con él se profundiza, como se profundiza también la autopercepción. El adolescente refuerza la idea de que es un *“perdedor”*. En este sentido es importante lo que señala Silva Balerio cuando afirma que *“esa vulnerabilidad de los sujetos y sus familias, los hace mejores “candidatos” para ser*

⁸¹ Viñar, Marcelo, ob. cit. pág. 15.

⁸² Idem. pág. 24.

*seleccionados por el sistema de control social, ya que el accionar de los aparatos represivos se orienta al control de las poblaciones excluidas”.*⁸³

En cuanto al *planteamiento y resolución de conflictos*, y aunque tanto el CNA como las normas internacionales referidas anteriormente expresamente establecen que los adolescentes privados de libertad tienen derecho a estar informados sobre el régimen de funcionamiento institucional y el régimen de convivencia, los entrevistados manifestaron no haberseles informado nunca acerca de ante quien plantear sus problemas sugerencias o quejas, ni haber conocido nunca ningún reglamento de convivencia. Y agregan que lo que saben es que lo primero que le dicen cuando les informan que han cometido una indisciplina, es que se quedan sin visita y sin la posibilidad de efectuar llamadas telefónicas.

Los adolescentes manifestaron que la forma que tienen para plantear un problema o conflicto es *“el motín”*.

En este sentido los investigadores afirman que *“este tipo de forma violenta de plantear los conflictos con la institución se relaciona con el régimen carcelario de los distintos establecimientos”*.⁸⁴

Señalan que la violencia del sistema estimula las respuestas provoca y fomenta respuestas violentas de los adolescentes, agregando que *“cuando el conflicto es entre pares, vinculado con problemas de relación, los adolescentes plantean como respuesta la utilización de la violencia y no visualizan a la institución como un vehículo para resolver el problema”*.⁸⁵

Si a todo lo penoso de lo que “traen” –pobreza, marginación, exclusión-, se le suma lo que “reciben” cuando entran al SIRPA –encierro, ocio, aburrimiento- el sin sentido de su existencia se profundiza, por lo que si bien ansían el momento de salir de la privación de libertad, saben que cuando lo hagan, las posibilidades de mejorar su existencia no existen.

Como muy bien señalaba Viñar en el Paraninfo de la Universidad de la República el 28 de junio de 2010, en este tema nuestro país se encuentra en una contradicción flagrante, ya que habiendo firmado la Convención de los Derechos del Niño, en lugar de cumplir con el deber de una verdadera instrumentación y aplicación de medidas socioeducativas para los adolescentes infractores de la ley penal en régimen de privación de libertad *“sólo brinda instituciones donde se los encierra veintidós de las*

⁸³ Silva Balerio, Diego, *“Pedagogía de la sumisión”*, en Berro, Graciela, Cohen, Jorge, Silva Balerio, Diego, op. cit. pág. 137.

⁸⁴ Movimiento G. Volpe/UNICEF, ob. cit. pág. 64.

⁸⁵ Idem., pág. 66.

veinticuatro hrs. del día”⁸⁶, agregando que “la institución que busca ser rehabilitadora se transforma en algo similar a la mazmorra medieval o al moderno campo de concentración”.⁸⁷

4.1.3 La privación de libertad. El encierro

El artículo 89 del CNA dispone que el régimen de privación de libertad consiste en recluir al adolescente en un establecimiento que asegure su permanencia en ese lugar, sin menoscabo de los derechos consagrados en ese código, las normas constitucionales y legales y los instrumentos internacionales.

La privación de libertad ha sido cuestionada como sanción ante algunos casos de infracciones a la ley. Opiniones o enfoques desde la Filosofía o desde la Ética han fundamentado la oposición a este tipo de penalización en la defensa de los Derechos Humanos, ya que sería una forma de violencia.

Diego Silva Balerio –citando a Baratta-, nos recuerda acerca de la violencia “(...) algo evitable que obstaculiza la autorrealización humana (esto es) la satisfacción de necesidades humanas”. Complementando el sentido de la cita explica que los derechos humanos son la proyección normativa de las necesidades, por lo que la violencia impide la satisfacción de las necesidades humanas.⁸⁸

Silva señala además que el Estado ejerce violencia institucional formal evidente cuando determina sanciones privativas de libertad, ya que este tipo de pena supone la privación del ejercicio de los derechos básicos. Afirma además que la cárcel responde con violencia a la violencia, reproduciendo la violencia y la marginalidad.

Fortaleciendo este argumento, señala que “El ámbito carcelario es un espacio propicio para el éxito de propuestas disciplinantes, negadoras de los sujetos, que mediante la

⁸⁶Viñar, Marcelo, Palabras mencionadas en el Paraninfo de la Universidad de la República e oportunidad de la presentación de su libro *Mundos adolescentes y vértigo civilizatorio*, 28 de junio de 2010, www.vozyvos.org.uy.

⁸⁷ Idem.

⁸⁸ Silva Balerio, Diego, “Pedagogía de la sumisión”, en Berro, Graciela, Cohen, Jorge, Silva Balerio, Diego (2008), *Engarrados. Relatos y experiencias de adolescentes en el sistema penal juvenil*, Montevideo, Ed. Tradinco, pág. 138.

opresión del cuerpo se encarcela el espíritu, se moldea la personalidad de los sujetos, ejerciendo el poder de forma arbitraria".⁸⁹

Para Silva las posturas referidas al tema de la privación de libertad como sanción penal podrían resumirse en tres: 1) quienes propugnan la abolición de la prisión; 2) aquellos que pretenden que se utilice para la menor cantidad de sujetos posibles, para aquellos que han cometido delitos muy graves contra las personas y 3) los ubicados en posiciones políticas reaccionarias que depositan en la prisión una función higienista, de limpieza social, creyendo en la posibilidad de erradicar el delito.⁹⁰

La casi totalidad de las opiniones que abordan este asunto se enmarcan en la segunda postura que –aceptando la privación de libertad- consideran que la pena no suponga la violación de los derechos humanos de la persona infractora, o lo que Silva denomina la “justicia-venganza”.

La redacción de la normativa penal es resultado de una construcción cultural que se da en el marco de una época, por lo que deben considerarse como dinámicas, ya que las sociedades con el paso del tiempo cambian su estructura mental y su sensibilidad. Por eso muchas normas penales son consideradas anacrónicas, ya que son respuesta a problemas que en la actualidad no existen o no responden a las nuevas formas del delito, que a su vez son reflejos de características nuevas de la sociedad.

Es el Estado que ha creado la sociedad el encargado de responder al problema del delito, definiendo los diferentes tipos de delito, la tipificación de las acciones infractoras, así como las penas a aplicar.

Por eso cuando la sociedad tiene “miedo” porque percibe estar viviendo en medio de la inseguridad –real o virtual-, apela a la profundización de los castigos. Como señala Silva, en esos contextos *“aparecen dispositivos de control y castigo que penalizan conductas transgresoras de las normas penales, surgen las sanciones privativas de libertad, y la cárcel como refinado instrumento de defensa del orden social y como dispositivo que afecta la dignidad del sujeto destinatario de la pena*”.⁹¹

Lo que sucede dentro del S.P.J. de nuestro país –en sus tres niveles, pero especialmente en el segmento ejecutivo- es un claro ejemplo de esto, ya que cuando el “miedo” por la “inseguridad” presiona, aparece un efecto de retroalimentación de la violencia.

Tanto la violencia con el adolescente –generalmente pobre o en situación de calle-, que no ha delinquido, como con el adolescente infractor privado de libertad. La estigmatización y *“la segregación del otro hace que estemos distanciados, y el*

⁸⁹ Idem. pág. 139.

⁹⁰ Idem. pág. 139

⁹¹ Idem. pág. 149

desconocimiento resalta los aspectos negativos como el miedo, y nos referimos al miedo utilizado como estrategia de dominación, ya que el miedo, la desconfianza, son utilizados como instrumentos para la legitimación del ejercicio de violencia estatal avalada por la sociedad".⁹²

Otra característica del encierro para la práctica de la privación de libertad tiene que ver con el concepto de *humanidad*. Precisamente en estos momentos en nuestro país se levantan voces para "humanizar el sistema carcelario" y cambiar la modalidad de las penas que impliquen la privatización de la libertad, con reclamos para "humanizar las medidas de reclusión, detención o internación". Reclamos por la dignidad de las personas, *"porque los dispositivos penales, ponen en duda, en muchas ocasiones la dignidad humana del sujeto devenido objeto de intervención. En tanto que deshumaniza a quienes son captados por el sistema punitivo incorporando una invasión de violencia que puede llegar a la tortura o la muerte (asesinato o instigación al suicidio)*".⁹³

En este sentido Viñar también nos interpela como sociedad al afirmar que la distancia que existe entre la humanización y la deshumanización en el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal privados de libertad es mayor que la que existe entre el "cielo" y el "infierno", y que sin embargo frente a la gravedad del hecho, la falta de reacción social pareciera responder a que *"como los perros de Pavlov-, todos estamos colectivamente habituados o condicionados a soportar la coexistencia de la vida civilizada con la barbarie, la faceta querible y la repugnante, de la civilización y la condición humana"*.⁹⁴

Viñar nos recuerda que se sabe científicamente que *"la privación de libertad y su extremo, la experiencia de confinamiento y privación sensorial, son recursos casi seguros para enloquecer a un ser humano, para que se comporte como un bicho más que como un prójimo o semejante"*.⁹⁵

Para Viñar una de las manifestaciones iniciales de esta deshumanización es el enfoque general del concepto de lo socioeducativo, ya que para él *"es necesario invertir la secuencia tradicional de que primero es el diagnóstico y luego la rehabilitación. Lo primero es amar y cuidar, no diagnosticar la peligrosidad o la sociopatía. El diagnóstico no puede ser el gesto inicial, sino el corolario del fracaso de las acciones y procesos de rehabilitación"*.⁹⁶

⁹² Idem. pág. 149.

⁹³ Idem. pág. 50.

⁹⁴ Viñar, Marcelo, Palabras pronunciadas en el Paraninfo de la UdelaR el 28 de junio de 2010.

⁹⁵ Idem.

⁹⁶ Viñar, Marcelo, *Mundos adolescentes y vértigo civilizatorio*, pág. 94.

El peso que en la cultura occidental ha tenido la doctrina jurídica, médico forense y psiquiátrica tradicional, que para la penalización prioriza el acto antisocial sobre la peripecia vital de la persona que ha cometido el acto, es lo que ha legitimado “*las instituciones ortopédicas, tutelares y normalizantes, pero no humanizantes*”.⁹⁷

4.1.4 El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. La tensión entre paradigmas

Al referirse a la complejidad del sistema penal juvenil, y en especial a la vulnerabilidad a dicho sistema, Uriarte señala que para poder entender esa trama no sencilla, era necesaria una mirada desde paradigmas ya que desde el marco general podemos orientarnos para poder entender y explicar lo sistémico. En ese sentido afirma que “*El paradigma permite concebir en conjunto lo que el poder fragmenta...Pensar desde paradigmas permite movernos en las grandes generalidades, en concepciones generales del mundo y evita la atomización de los cambios, favoreciendo su percepción*”.⁹⁸

Destaca además como ventaja de pensar en clave de paradigma la posibilidad de protegernos “*de concepciones pragmáticas, cautivas del hecho consumado, así como de versiones fragmentadas y anecdóticas de lo que ocurre en el sistema penal juvenil. En ese sentido, una opción paradigmática tiene una dimensión de utopía, esto es, de algo no realizado pero que, como el horizonte, permite caminar hacia ella, al decir de Eduardo Galeano*”.⁹⁹

La tensión de paradigmas ha sido un fenómeno permanente en el Sistema Penal Juvenil uruguayo, y que se ha manifestado históricamente en la existencia de diversas tendencias que oscilan entre la consideración del joven infractor como persona en desarrollo cuyos derechos humanos los adultos deben proteger y por otro lado la consideración de esos jóvenes como personas que –independientemente de su edad-, deben responder a la falta cometida como los infractores adultos. , El primer enfoque - sin dejar de responsabilizar al adolescente por la falta cometida-, tiene como objetivo lograr su reinserción como persona competente en la sociedad, mientras que el

⁹⁷ Idem.

⁹⁸ Uriarte, Carlos, op. cit. pág. 37.

⁹⁹ Idem. pág. 37.

segundo enfoque de alguna manera pretende legitimar las respuestas claramente punitivas.

Las denuncias por violación de los derechos humanos de los adolescentes infractores ocurridos recientemente en el SIRPA, han puesto en el eje del debate el tema de la privación de libertad así como las características de las medidas sancionatorias que se aplican en ese contexto.

El debate abrió el tratamiento de varios temas que dieron cuenta de una tensión entre paradigmas. Por un lado el paradigma que defiende la existencia de un sistema penal juvenil que en la aplicación de las medidas privativas de libertad ponga énfasis en el aspecto *custodial* y por otro lado el paradigma que demanda un sistema penal juvenil que en la aplicación de las medidas privativas de libertad ponga énfasis en el aspecto *rehabilitador*.

El fracaso del sistema de rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley en el marco de la privación de libertad es un dato de la realidad. Uno de los motivos de dicho fracaso refiere no solamente a la responsabilidad por acción directa de algunas autoridades del SIRPA, sino también por las omisiones de dichas autoridades, una de las cuales consiste en la mala preparación para una tarea tan delicada y específica de los funcionarios operativos. A esto se agregaría la situación de impunidad de algunos de estos funcionarios por situaciones de violaciones de los derechos humanos de los adolescentes infractores privados de libertad.

Serías dificultades de infraestructura edilicia, problemas de hacinamiento de los adolescentes, escaso número de funcionarios, frecuentes inasistencias de éstos – mayoritariamente por problemas de salud asociada al tipo de tareas-, así como su mala preparación para los fines rehabilitadores y socioeducativos, constituyen el marco propicio para que existan situaciones como las denunciadas recientemente y que habilitaron la intervención del Poder Judicial.

Por si esto fuera poco, muchas de las irregularidades en los procedimientos de dichos funcionarios para con los adolescentes parten de la percepción de que como la mayoría de ellos son “incorregibles”, el encierro evita los problemas de malas conductas. Esta percepción estaría en la base de entender las medidas socioeducativas como “inútiles”. Como en un círculo vicioso, el encierro incrementa la violencia de los jóvenes, lo que trae de parte de esos funcionarios otras formas de castigo, que seguirían alimentando el malestar y el rencor de esos menores. Esta concepción parte de quienes están convencidos que la delincuencia es un camino tomado libremente y por gusto por parte de estos jóvenes.

Como señalan González y Leopold, el encierro y el disciplinamiento parecen ser la base de la propuesta actual de reforma del Sistema, fundamentalmente a partir de las

fugas, donde se haría más visible “el mandato institucional de llevar las fugas “a cero” como parte de una modalidad de gestión, que desde un actor ejecutivo, se concibe como necesariamente “firme” para efectivizar la retención de los adolescentes en la privación de libertad”.¹⁰⁰

Como producto de las respuestas de los representantes de los segmentos ejecutivo, policial y legislativo –consultados por las autoras durante su investigación a partir de entrevistas-, las mismas fueron heterogéneas .en cuanto a las “orientaciones y contenidos que debería asumir el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA)... ya que “Los enunciados parecen asociar en su respuesta al fenómeno un paradigma que se debate entre lo custodial y el discurso de la rehabilitación. En este sentido, se recuperan las preocupaciones que los actores políticos emitían con respecto a un sistema que se concibe ineficaz en el cumplimiento de sus propósitos fundacionales”.¹⁰¹

Con la decisión de priorizar lo custodial a partir del énfasis de la “necesidad” del encierro, cualquier medida que se tome desde la perspectiva de lo socioeducativo pierde legitimidad.

La denominación de *medidas socioeducativas* figura expresamente en el CNA, ya que este Código considera que desde el marco garantista las penas del SPJ deben tener un objetivo educativo para que el adolescente infractor tome conciencia del daño ocasionado por su falta y de que todos en la sociedad tenemos derechos y obligaciones. De ahí que es una obligación de las instituciones donde el adolescente esté internado fortalecer los vínculos sociales y familiares.

Los postulados garantistas que las normas internacionales y nacionales señalan en el sentido de la obligación de aplicar verdaderas medidas socioeducativas para con los adolescentes privados de libertad no coinciden con la realidad en muchos espacios del SIRPA, fundamentalmente del Hogar Ser, objeto de las denuncias que se analizan en la presente monografía.

Sobre todo cuando además se entiende lo socioeducativo únicamente como el deber de alfabetizar y preparar para el mundo del trabajo.

¹⁰⁰ González, Carolina, Leopold, Sandra, op. cit. pág. 59.

¹⁰¹ Idem.. pág. 57.

CONCLUSIONES

Al finalizar el estudio del tema elegido para la Monografía final –y con respecto primeramente al *objetivo general* planteado, el análisis de las fuentes bibliográficas y de las fuentes documentales nos permitieron confirmar la existencia de la vulnerabilidad de los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley penal, a partir de la contradicción existente entre la normativa vigente en cuanto a los deberes del Estado para la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia por un lado, y por otro la realidad que se observa en los Centros u Hogares donde se encuentran los adolescentes en conflicto con la ley privados de libertad, como muestran las denuncias y los debates a que dieron lugar los hechos comprendidos en el período 2013 – 2014.

Las fuentes consultadas dieron cuenta de que son estos adolescentes –que han sufrido violaciones a sus derechos humanos desde antes de cometer su primera infracción a la ley -, los que son objeto muchas veces de vulnerabilidad ante el Sistema Penal Juvenil.

En el marco del Sistema Penal Juvenil, las diferentes situaciones de violación a sus derechos se dan en el ámbito operativo de todos los actores implicados (la Policía, el Poder Judicial y el INAU). Lo que muestra la relación directa que existe entre derechos humanos y vulnerabilidad ante el poder punitivo.

Aquí aparece uno de los desafíos teóricos más importantes del problema, ya que de acuerdo a las palabras de la Dra. Berro *“este tema es sumamente delicado y se encuentra estrictamente vinculado con el ejercicio del poder y sus límites en un Estado de derecho”*.¹⁰²

De este modo vulnerabilidad y poder dan lugar generalmente a una relación compleja. Como afirma Uriarte existen fundamentalmente dos campos de vulnerabilidades, *“ante el sistema penal juvenil, y más específico, en la privación de libertad, esto es, ante el poder punitivo y un terreno donde el mismo opera con particular aspereza: y ante el poder de los adultos, del mundo adulto. Ambas dimensiones, cruzadas, hablan de un particular e intenso espesor de vulnerabilidad”*.¹⁰³

Además, cuando el adolescente es nuevamente detenido se va fortaleciendo su autopercepción negativa, ligada a la infracción y al impacto que en su vida va

¹⁰² Berro, Graciela, Cohen, Jorge, Silva Balerio, Diego, op. cit. pág. 8.

¹⁰³ Uriarte, Carlos (2005), *Vulnerabilidad, privación de libertad de jóvenes y derechos humanos*, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, pág. 14.

marcando la casi permanente relación con el delito, con la calle, pero fundamentalmente con el aparato represor, los centros de privación de libertad, la eventual fuga, y nuevamente la calle.

El proceso delictivo y la consecuencia represiva legitiman de alguna manera ese rol del que el adolescente solo podrá escapar si quienes tienen la obligación de proteger sus derechos actúan de acuerdo a sus obligaciones.

Ante la ineficacia de las medidas socioeducativas, la privación de libertad se convierte en la demostración de que en el marco del Sistema Penal Juvenil de nuestro país se sigue sin administrar justicia. Como señala Morás, a pesar del discurso “humanizador” “...los adolescentes siguen representando un mero expediente y no personas con atendibles trayectorias de vida”.¹⁰⁴

En cuanto al *objetivo específico* que nos propusimos, la bibliografía y las fuentes relevadas nos permitieron comprobar que la violación de los derechos humanos de los adolescentes infractores privados de libertad en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes, fundamentalmente a partir del resultado de las denuncias formuladas, se ajustaba a la realidad.

Los debates iniciados a partir de las denuncias dieron cuenta de las intenciones, las concreciones, pero también de las omisiones del Estado de proteger los derechos humanos de niños y adolescentes. El análisis de las fuentes permitió observar la existencia de la doble vulnerabilidad de los adolescentes en conflicto con la ley, es decir, por un lado con respecto al sistema penal juvenil y por otro lado ante el poder de los adultos.

Tanto en la bibliografía como en las fuentes documentales y de prensa consultadas aparece frecuentemente la asignación de responsabilidades en cuanto a la crisis del Sistema Penal Juvenil uruguayo en general, y en lo que refiere a la aplicación de las medidas privativas de libertad en particular.

Frente a las denuncias, los actores involucrados difícilmente parten de una visión integral del problema, por lo que las opiniones se transforman en un cruce de acusaciones. Por su parte, las autoridades del SIRPA ponen el acento en que el problema es complejo, que se está haciendo un gran esfuerzo, pero que algunos de los resultados son de mediano y de largo plazo, como lo que se refiere a la infraestructura edilicia y al ingreso de personal capacitado. Desde los profesionales del SPJ se insiste

¹⁰⁴ Morás, Luis E. “*Nacer siendo menor. Reflexiones ...*”, en Serna, Miguel (Coord.), op. cit. pág. 268.

en el debilitamiento de la obligación de rehabilitación, a la superpoblación de los centros de internación, y a la falta de capacitación de los funcionarios operativos.

Las denuncias y los debates a que éstas dieron lugar dan cuenta de la permanencia de la tensión entre el paradigma punitivo y el paradigma rehabilitador. y que se hace particularmente notoria cuando se viven situaciones concretas que muestran el aparente dilema entre custodiar y rehabilitar.

Como afirma Morás *“la actual realidad que marca la imposibilidad de rehabilitar para un mercado de trabajo que ya no los necesita, o reinsertar en una sociedad que prefiere expulsarlos”*.¹⁰⁵

Finalmente, y a manera de cierre de las reflexiones finales que dan contenido a las conclusiones, nos parece importante destacar las posibles soluciones al problema planteado en el objeto de estudio de la presente Monografía, a partir de los diferentes aportes surgidos de los propios debates abiertos como consecuencia de las denuncias analizadas.

El problema de la adolescencia en conflicto con la ley penal es complejo, y cualquier solución debe priorizar la consideración de dichos adolescentes como sujetos de derecho y el Estado debe garantizar la protección y promoción de esos derechos y no las propuestas que profundizan su vulnerabilidad y el desamparo social de que son objeto.

Pero también es una obligación de toda la sociedad, por acción u omisión, ya que todos somos responsables de alguna manera de la polarización y de la agresividad en nuestras formas de comunicarnos. Por eso son fundamentales las instancias en que la sociedad organizada se expresa.

Un ejemplo fue el rechazo a bajar la edad de imputabilidad penal adolescente en octubre pasado, y la movilización que previamente dio lugar a la formación de la Comisión “No a la Baja”, que desde junio de 2011 conformó un espacio intersocial, interpartidario, interreligioso e intergeneracional. Además de un hecho político, ese movimiento generó un hecho social, a tal punto que hoy muchos hablan de la “generación *colibrí*”, en alusión al símbolo gráfico que incorporaron los integrantes de dicha Comisión.

El Movimiento organizado partió de una convocatoria realizada por organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y la adolescencia, como el Comité de los Derechos del Niño, así como el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay

¹⁰⁵ Morás, Luis E., *“Nacer siendo menor. Reflexiones...”* en Serna, M. (Coord.), op. cit. pág. 281.

(IELSUR), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), y sectores de juventud de los partidos políticos. A ellos se agregaron personas que sin pertenecer a estas organizaciones, lo hicieron a título personal.

En un reportaje radial realizado a la Dra. Fabiana Goyeneche – abogada, 29 años, vocera de la Comisión “No a la Baja”--, ¹⁰⁶ ella señalaba que la iniciativa de la Comisión surgió para desmitificar la idea que existe en el imaginario colectivo sobre el desinterés y la inactividad de la juventud, así como para trabajar contra la estigmatización y criminalización de los jóvenes por parte de ciertos sectores sociales y políticos. En este sentido Goyeneche señala que *“por ejemplo en muchas ocasiones vimos editoriales en la prensa que hablaban de la juventud, hablaban de los ni-ni y automáticamente se los relacionaba con el delito y con los menores infractores, cuando no hay una relación necesaria en absoluto”*. ¹⁰⁷

La falta de conciencia en que todos somos responsables ha llevado a algunas personas a focalizar el problema en los menores infractores, dando lugar a lo que Morás llama “infantofobia”, que demanda controles y represión de parte de algunos sectores sociales y políticos que han sido responsables de la marginalidad y la exclusión que han sufrido esos niños y adolescentes, muchos de los cuales han estado o están en conflicto con la Ley.

Luchar contra esta clase de problemas es un desafío para toda la sociedad, pero muy especialmente para quienes aspiramos a hacerlo profesionalmente desde el Trabajo Social, fundamentalmente por ser un deber de servicio de todo universitario, consagrado en la Ley Orgánica de la Universidad de la República.

Nuestro objetivo debe estar en línea con lo que también Viñar nos recuerda cuando señala que *“La alienación social durante años, décadas o generaciones, y la descomposición que muchas veces -aunque no siempre- son su corolario, solo es reversible si las acciones materiales se combinan con una terapia del alma... para construir un pasado menos clausurado y ominoso, para tejer redes de alianza de lealtades y pertenencias, menos lúgubres, más esperanzadas”*. ¹⁰⁸

¹⁰⁶ Radio *El Espectador*, Programa “*En Perspectiva*”, jueves 6 de noviembre de 2014.

¹⁰⁷ Ídem.

¹⁰⁸ Viñar, Marcelo, *Mundos adolescentes y vértigo civilizatorio*, pág. 110.

BIBLIOGRAFÍA

Aloisio, Carlos, Chouhy, Cecilia, Trajtenberg, Nicolás, Vigna, Ana, (2008), *Jóvenes en conflicto con la ley: una mirada a las instituciones de rehabilitación desde la perspectiva de género*, Montevideo, Ed. INFAMILIA. .

Berro, Graciela, Cohen, Jorge, Silva Balerio, Diego (2008), *Engarrados. Relatos y experiencias de adolescentes en el sistema penal juvenil*. Montevideo, Ed. Tradinco.

Cal, Marina, "Aproximación a la noción de niños, niñas y adolescentes en situación de calle" (Ponencia), Rivera, julio de 2011.

Cillero Buñol, Miguel, *El Interés Superior del Niño en el marco de la Convención internacional sobre los Derechos del Niño*, PDF, www.iin.oea.org.

Deus Viana, Alicia, *El acceso a la Justicia de las niñas, niños y adolescentes. El rol del defensor y el curador del artículo 8 del Código de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay*, PDF, www.iaci.org.uy.

Deus, Alicia, Lamas, Bilman, Palummo, Javier, *El proceso penal juvenil en el Uruguay a partir del Código de la Niñez y Adolescencia*, PDF, www.2.convivencia.edu.uy

Faroppa, Juan, "Comunicación y niñez en situación de calle" (Curso), Rivera, julio de 2011, www.vozyvos.org.uy.

Galeotti, Raquel (2013), *Adolescentes infractoras. Discursos y prácticas del Sistema Penal Juvenil uruguayo*, Montevideo, Psicolibros/Waslala.

García, Socorro (), *Análisis de los cambios en las políticas públicas de infancia*, [www.ipes.anep.edu.uy.documentos..](http://www.ipes.anep.edu.uy/documentos..)

García Mendieta, Carmen, *El Código de la Niñez y Adolescencia en Uruguay*, PDF, www.biblojuridicas.unam.xc/libros/libro.

González, Carolina, Leopold, Sandra, López, Laura, Martinis, Pablo (2013), *Los sentidos del castigo. El debate uruguayo sobre la responsabilidad en la infracción adolescente*, Montevideo, UdelaR, CSIC, Ed. Trilce.

Leopold Constáble Sandra. (2001) *Tratos y Destratos*. Tesis presentada a la Universidad Federal de Río de Janeiro para la obtención del título de Master en Servicio Social.

Morás, Luis Eduardo (2012), *Los hijos del Estado*, 2ª ed., Montevideo, SERPAJ..

Movimiento Nacional Gustavo Volpe/UNICEF (2008), *Privados de libertad. La voz de los adolescentes*, Montevideo, UNICEF Uruguay.

Pereira, Javier, Nathan, Mathías (2009), *Acción Pública No Gubernamental y Convención sobre los Derechos del Niño en Uruguay*, Informe de UNICEF/URUGUAY.

Pérez Vaquero, Carlos, "La justicia juvenil en el derecho internacional", en *Derecho y cambio social*, www.derechoycambiosocial.com, PDF, abril de 2014.

Serna, Miguel (Coord.) (2010), *Pobreza y (des)igualdad en el Uruguay: una relación en debate*, Montevideo, UdelaR, Facultad de Ciencias Sociales (Dpto. de Sociología), CLACSO.

Terra, Carmen, “*Infantilización de la pobreza o pauperización de sectores populares?: claves para una problematización*”, en Serna, Miguel (Coord.) (2010), *Pobreza y (des)igualdad en Uruguay: una relación en debate*, Montevideo, Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, CLACSO, ASDI.

UNICEF, *Justicia y Derechos del Niño*, N° 1, Sección Primera, Santiago de Chile, 1999

UNICEF, *UNICEF en Uruguay. Informe Anual 2014*.

Uriarte, Carlos E. (2006), *Vulnerabilidad, privación de libertad de jóvenes y Derechos Humanos*, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria.

Viñar, Marcelo (2009), *Mundos adolescentes y vértigo civilizatorio*, Montevideo, Ed. Trilce.

Zaffaroni, Eugenio R. (2009), *En busca de las penas perdidas*, Buenos Aires, Editora AR S.A..

REVISTAS

ESPACIO ABIERTO, Director Sergio Núñez, Centro de Investigación y Estudios Judiciales (CIEJ), Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), N° 11, noviembre de 2009, Revista Semestral.

ESPACIO ABIERTO, Director Daniel Fessler, Centro de Investigación y Estudios Judiciales (CIEJ), Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), N° 14, mayo de 2011, Revista Semestral.

ESPACIO ABIERTO, Director Daniel Fessler, Centro de Investigación y Estudios Judiciales (CIEJ), Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), N° 16, mayo de 2012, Revista Semestral.

PRENSA (oral y escrita)

RADIO *EL ESPECTADOR*, Programa “*En Perspectiva*” on-line, www.espectador.com.

SEMANARIO *BRECHA*. Los ejemplares relevados corresponden al período *octubre de 2013 hasta setiembre de 2014*.

FUENTES DOCUMENTALES

INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (2010), Ficha Informativa N° 1, Montevideo, 2010.

INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (2013), *Informe* presentado por la INDDHH al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Comité de Derechos Humanos), 5 de setiembre de 2013.

INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (2014), *Informe* presentado por la INDDHH a la 52ª Sesión del Comité contra la Tortura (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes), 11 de abril de 2014.

INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (2014), *Informe* presentado por la INDDHH a la 68ª Sesión del Comité de los Derechos del Niño (Convención sobre los Derechos del Niño), 12 de mayo de 2014.

JUNTA NACIONAL DE DROGAS. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Observatorio Uruguayo de Drogas, 5ª. *Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media. Entre el placer y displacer: los adolescentes en su laberinto. Comportamiento de riesgo*, Montevideo, 2011.

MINISTERIO DEL INTERIOR, Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad, División de Estadísticas y Análisis Estratégico, Montevideo, 2013.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Asamblea General, *Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad*, Res. 45/113 de 14 de diciembre de 1990.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. *Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)*, www.unicef.org/panama/spanish.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. *Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)*, www.ohchr.org.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana)*, www.ohchr.org.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES de Uruguay, *Declaración* en apoyo a la INDDHH, 30 de abril de 2014, www.montevideo.com.uy/auc.aspx.

PODER LEGISLATIVO. República Oriental del Uruguay, *Código del Niño de 1934*, www.parlamento.gub.uy

PODER LEGISLATIVO, República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. *Diario de Sesiones*. Aprobación del Proyecto de Ley de creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Montevideo, 31 de mayo de 2011.

PODER LEGISLATIVO. República Oriental del Uruguay. Cámara de Senadores, *Diario de Sesiones (22ª. Sesión Extraordinaria)*. Aprobación de la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Montevideo, 23 de junio de 2011.

PODER LEGISLATIVO. República Oriental del Uruguay. Asamblea General. *Aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia*, 14 de setiembre de 2004.

Viñar, Marcelo, Palabras mencionadas en el Paraninfo de la Universidad de la República el 28 de junio de 2010 en oportunidad de la presentación de su libro *Mundos adolescentes y vértigo civilizatorio*, www.vozyvos.org.uy